Cuadernos Descentralistas 19

La Controvertida Influencia de los Movimientos Regionales

Romeo Grompone
Elisa Wiener Bravo

IEP
INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS

GRUPO Propuesta CIUDADANA

La Controvertida Influencia de los Movimientos Regionales

Romeo Grompone
Elisa Wiener Bravo

IEP
INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS

GRUPO Propuesta CIUDADANA

Participa Perú

Auspician:

Esta publicación fue realizada con el apoyo técnico y financiero del Proyecto Participa Perú, bajo los términos del Convenio Cooperativo N° 527-A-00-02-00187-00, entre el Consorcio integrado por Catholic Relief Services, Grupo Propuesta Ciudadana, Research Triangle Institute y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID-Perú. Las opiniones expresadas en este documento son del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID.

Cuadernos Descentralista N° 19

© **Grupo Propuesta Ciudadana**
León de la Fuente 110 Magdalena
Telef. 613 8313 Telefax. 613 8315
Email: propuest@desco.org.pe

Primera edición
Lima-Perú. Marzo del 2006
Tiraje: 1.000 ejemplares
Hecho el depósito legal N° 2006-2326
Ley 26905 - Biblioteca Nacional del Perú
Corrección de estilo: Mario Naranjo
Coordinación: Carola Tello
Diagramación / Impresión: Tarea Gráfica

IEP — Instituto de Estudios Peruanos - IEP

desco — Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO

Cipca Perú — Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA

CEPES — Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación CEDEP

ARARIWA — Asociación ARARIWA

cbc — Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolome de las Casas» CBC

cedar — Centro de Estudios para el Desarrollo Regional CEDER

CEDEPAS — Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social - CEDEPAS

alternativa — Centro de Investigación Social y Educación Popular ALTERNATIVA

IDS — Instituto de Diálogo y Propuesta - IDS

Félix Wong
Presidente del Directorio

Javier Azpur
Coordinador Ejecutivo

Índice

Introducción 9

I. San Martín: La convivencia cuestionada de partidos y movimientos 11

II. La agitada actuación de los movimientos regionales en Cajamarca 20

III. La relativa vigencia de los partidos en Loreto y la eclosión de los movimientos regionales 33

IV. Conclusiones 47

Anexo 53

La Controvertida Influencia de los Movimientos Regionales

Romeo Grompone

Elisa Wiener Bravo

Instituto de Estudios Peruanos

INTRODUCCIÓN

En todo el país han cobrado relativa vigencia movimientos regionales que tratan de plantear alternativas de cambio y desarrollo en los departamentos en que actúan. Este proceso no es sencillo de describir cuando se trata de interpretar las razones que motivan su surgimiento. Puede ser tanto expresión de la carencia, por parte de los partidos nacionales, de dirigentes conocedores de los problemas de la comunidad de donde proceden, o del seguimiento por parte de ellos de rutinas que les dificultan entender los problemas de cada zona a la altura de lo que grupos emergentes locales requieren. O, en otra línea —esta vez ya no por el lado de la carencia sino de la propuesta más o menos articulada—, se debe partir de la comprensión de que la reforma descentralista también supone cambios en los estilos de hacer política y pensar —sobre todo en aquellos que estuvieron alineados en propuestas de izquierda, pero no solamente en ellos—: se trata de organizar nuevas instituciones políticas con coordinaciones entre ellas, pero sin la idea de un lugar central desde donde se tomen las principales decisiones. La idea ya no es solamente el cuestionamiento de la supuesta hegemonía de Lima, sino a veces hasta de un centro directivo mismo, y se dice pensar, aunque como veremos por lo general no se practica lo afirmado, en soluciones de largo plazo.

La Ley de Partidos establece, asimismo, que los movimientos regionales no pueden presentarse en distritos plurinominales y exige, a las organizaciones políticas, presencia en el conjunto del país, entre otras obligaciones. La mayoría de estas últimas ¿dónde puede conseguir comités y cuadros a la altura de lo que esta disposición requiere? Formulando la misma pregunta desde otra posición: ¿cómo evitar que los movimientos regionales no ingresen en una suerte de situación de enclaustramiento, queden encerrados en sus problemas regionales y pierdan de este modo los vínculos a establecer, necesariamente más amplios, para conseguir recursos e influencias para atender los problemas que afligen a sus departamentos?

La solución luce en apariencia sencilla, pero acaso lo es solamente en apariencia. Se trataría de llegar a alianzas entre partidos nacionales y movimientos regionales, tomando en cuenta que ambos tipos de institución parecieran necesitarse unos a otros. Ocurre, sin embargo, que un proyecto nacional no es la suma de los proyectos regionales. Y aun en los casos en que pareciera notarse una relativa confluencia se desatará una competencia a nivel local entre dirigentes de distinta procedencia o aun, en algunos casos, que transitaron en su vida política etapas comunes y ello motiva tanto situaciones de acercamientos como desconfianza y cálculos de corto plazo por doquier.

Este estudio analizará los movimientos regionales; estos movimientos constituyen un fenómeno poco estudiado, si no radicalmente ignorado en la sociología política peruana. Los departamentos elegidos son Loreto, Cajamarca y San Martín. El estudio no es sencillo tanto por la diversidad de estas expresiones como por la fluidez y la inestabilidad de los alineamientos con cambios de posición —que se precipitan en una coyuntura electoral, pero que vienen desde tiempo atrás—. Las estimaciones cuidadosas de correlaciones de fuerza entre colaboradores y a la vez contendores —ya que se trata de actores que parecen en algunos casos reunir esta condición contradictoria— y una intensa percepción acerca de los manejos de oportunidad

parecen ser propios de estos alineamientos, en parte porque las organizaciones políticas nacionales parecieran discurrir por un carril aparte en sus preocupaciones.

Quizás, antes de describir los casos elegidos de movimientos en esas regiones que a veces se acercan y otras bifurcan su camino, convenga señalar que, en un principio a partir de la transición democrática y luego de las elecciones regionales de 2002, parecieron plantearse dos líneas que luego se confunden o se desdibujan: un grupo, que es el de la Plataforma de Partidos Regionales —que luego asumirá el nombre de Coordinadora de Partidos Regionales—, entendía que debía plantearse una dinámica que empezara por los gobiernos locales y que a partir de allí pensara en una estrategia de largo plazo que les permitiera afirmarse primero en algunas zonas, luego en los departamentos, hasta llegar a situarse definitivamente en el plano nacional; otro grupo —Diálogo Regional— plantea con mayor fuerza, en el mismo período estudiado, la necesidad de que estos movimientos regionales tuvieran una mayor presencia nacional.

Como observaremos, aun en los tres departamentos que hemos elegido, las posiciones de estos movimientos son bastante diferenciadas y, en general, saliendo de las regiones elegidas para este estudio, son más radicales en Ayacucho, tendientes en cambio al centro izquierda en Nueva Amazonía y se muestran algunos de ellos renuentes a establecer alianzas entre ellos de manera sostenida si bien enfatizan la urgencia de establecer entre ellas a algunos niveles de coordinación ante la urgencia de llegar a algunas definiciones programáticas comunes y a una estrategia concertada de intervención. En las conclusiones analizaremos las claves cambiantes de este proceso; ahora conviene examinar, para entender las dinámicas internas de los movimientos regionales, lo ocurrido en Loreto, San Martín y Cajamarca, sus rasgos comunes y sus pronunciadas diferencias. Conviene tener en cuenta como antecedente previo que, en los comicios de 2002, las expresiones locales alcanzaron el 22% de los votos a nivel regional, si bien la mayoría de ellos había tenido una trayectoria política conocida previa y, en los casos de Manuel Duarte (Unidos por Junín) y Víctor Espinoza (Concertación en la Región para la Descentralización), desarrollaron en ese entonces una actuación política previa durante el en ese entonces reciente gobierno de transición, mientras que algunos de los restantes, vinculados ya sea a la izquierda, al fujimorismo o bien a otras organizaciones, parecían haber abandonado sus vínculos partidarios anteriores,[1] como ocurriera en Puno, Huánuco, Ucayali o Huancavelica. Esta relativa presencia en el año 2002 a nivel regional contrasta con una significativa mayor incidencia a nivel de provincias y distritos de candidatos independientes; es probable que el aislamiento del gobierno de Toledo haya dado mayor peso a esta orientación. A ello se agrega la falta de élites políticas en los departamentos de la mayoría de partidos. Este es el tema que queremos considerar.

[1] Meléndez, Carlos. Último mapa político. Análisis de los resultados de las lecciones regionales de noviembre de 2002. Lima: IEP, 2003.

I. SAN MARTÍN: LA CONVIVENCIA CUESTIONADA DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS

Desde principios de la década de los ochenta, San Martín se caracteriza por una activa vida política, con la intervención de partidos políticos, organizaciones sociales de extendida vigencia social y algunos movimientos cívicos que, en su oportunidad, plantearon nuevas alternativas para el desarrollo de la región. Ellos convivieron con procesos de difícil contención y manejo originados por la influencia del narcotráfico y de los grupos alzados en armas, especialmente el MRTA.

Como señala Patricia Zárate, en un estudio sobre la vida política y social de la zona, durante la década de los ochenta, tendrán una activa presencia en la vida del departamento la Federación Agraria Selva Maestra (FASMA) y el Frente de Defensa de los Intereses de San Martín (FEDISM).[2]

FASMA era la principal organización campesina en este departamento. Sostenía un conjunto de reivindicaciones y la mayoría de ellas se orientaba en dos direcciones: por un lado, la preocupación de que San Martín sea una región autónoma, frente a los intentos de articulación con otros departamentos que procuró el gobierno aprista en su proyecto de descentralización; y, por otro lado, la demanda de mejores precios para sus productos agrícolas.

El FEDISM tenía un perfil más definidamente gremial y articulaba a distintos sectores de la sociedad regional. Como señala Patricia Zárate, entre las agrupaciones del FEDISM se incluía la propia FASMA, los gobiernos locales, los comités de productores de arroz y maíz, los ganaderos y los maestros.

Estas organizaciones entran en crisis a fines de los ochenta y principios de los noventa. Entre otras razones, esta decadencia respondió al hecho de que algunos de sus dirigentes fueron ganados por la prédica violentista que ejercía por entonces el MRTA; otros se plegaron al fujimorismo; y finalmente, en conjunto, retrocedieron frente a la agresiva política desarrollada por el gobierno en la década de los noventa.

En el plano político, San Martín fue notoriamente una zona de influencia de Acción Popular. Ello se debió, en parte, al reconocimiento a Belaunde como líder político que hacía la población, en la medida en que la construcción de la Marginal de la selva promovió el desarrollo del departamento, lo convirtió en una zona de migración interna en el conjunto del país, y lo situó en el mapa social y político nacional de manera mucho más definida desde entonces, en contraste con lo que había sido un histórico aislamiento.

---

[2] Zárate, Patricia. La democracia lejos de Lima. Descentralización y política en el departamento de San Martín. Lima: IEP, 2003.

La presencia de grupos independientes en los noventa y su copamiento por el régimen

Su zona más desarrollada, la misma provincia de San Martín y su principal ciudad, Tarapoto, desarrolló una activa competencia con la capital administrativa del departamento, Moyabamba. El departamento, además, se caracterizó, durante la década de los ochenta, por la alternancia de gobiernos de Acción Popular (AP) y del Partido Aprista Peruano (APRA). Este proceso solamente fue interrumpido, entre 1996 y 1998, por el triunfo del grupo IDEAS, que se alineara con el gobierno de Fujimori y fue, más adelante, uno de los grupos fundadores de Vamos Vecino, institución que surgió como nueva alternativa de agrupación política frente a las fuerzas adheridas al gobierno de más antigua trayectoria.

La vigencia social de IDEAS ha pasado por altibajos, pero debe reconocérsele, aun en el momento actual, una relativa presencia, en la medida en que este movimiento obtuvo el gobierno provincial de Tarapoto a partir de su triunfo en las elecciones de 2002.

Cabe considerar que San Martín fue un espacio donde surgieron expresiones cívicas de grupos que aspiraban a pensar en conjunto el desarrollo de la región. Estos movimientos estaban constituidos fundamentalmente por jóvenes profesionales. Una de sus primeras expresiones será la ya aludida IDEAS, institución que en sus primeros tiempos surgirá como conjunción de un conjunto de intelectuales y técnicos jóvenes del departamento que, dentro del contexto limitado de oportunidades que daba el gobierno de Fujimori, estaba pensando en un desarrollo alternativo para la región.

Uno de sus líderes, Rolando Reátegui, cambiaría gradualmente de posición, alineándose más expresamente en apoyo del gobierno central, procurando construir un aparato alternativo al entonces existente por parte del oficialismo, pero seguidor fiel de sus lineamientos. Como consecuencia de esta decisión, alejará de lo que fuera en su tiempo una iniciativa auspiciosa, el grupo IDEAS, a buena parte de personas que acogieron, inicialmente de modo entusiasta, a dicha iniciativa. Algunos de ellos se integrarían posteriormente a Nueva Amazonía, el movimiento regional más significativo en la actualidad de la zona.

Como ya se señaló, el grupo IDEAS gana las elecciones municipales de 1996 y 1998, ya vinculado a Fujimori y pensando en la construcción de lo que luego sería Vamos Vecino. IDEAS realiza en su gestión un conjunto de obras de infraestructura en San Martín, contando con el apoyo de los grupos más pobres de la región, característica del estilo político de trabajo del gobierno autoritario en todo el país. Del mismo modo se trata de dar una idea de eficacia expresada sobre todo en la congruencia entre ofrecimientos y su posterior cumplimiento.

Rolando Reátegui, al igual que muchos de los que ahora aparecen como personalidades políticas y sociales de la región, es un profesional formado en Lima. Vinculado a familias de antiguas élites provincianas, procura pasar de la actividad económica a la política y proyectarse en el plano nacional. De hecho, pese a algunas obras realizadas y a un activo clientelismo político —a costa, según sus opositores, de un elevado endeudamiento interno—, no logrará ser reelecto. En 1998 triunfa en las elecciones provinciales de San Martín, Marina Aguilar, empresaria y docente vinculada a AP, partido con una historia de activa presencia política en el lugar.

La relativa independencia del Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR) durante el fujimorismo

Como ocurriera en otros departamentos del país, no obstante lo extendido del aparato del fujimorismo, el CTAR tuvo relativos márgenes de independencia e iniciativa para formular planes de desarrollo regional desde los cuales pensar el futuro del departamento. Ello ocurre tanto en 1998, durante la gestión de Yolanda Rojas, que se vincula en su traba-

jo a las iniciativas de un conjunto de ONG colaboradoras en su gestión, como cuando asume ese puesto, en el periodo comprendido entre 1999 y 2000, Juan Carlos del Águila.

Del Águila, procedente también de una familia de notables del departamento, aparece más comprometido que su predecesora con el proyecto fujimorista, pero mantiene también un relativo margen de autonomía, aun respecto de Rolando Reátegui, entendiendo que estaba investido de las suficientes calidades profesionales como para cimentar su propio proyecto. Se cuida de no entrar en un rumbo de colisión con el gobierno y hasta comparte sus lineamientos, pero no sigue línea a línea lo que se estaba haciendo en la gestión provincial. Piensa en algunos temas en sus propios términos, aun preservando una actitud prudente en lo que entendía que era conveniente para el desarrollo del departamento.

Como ya dijimos, tanto Juan Carlos del Águila como Rolando Reátegui provienen de familias de notables de San Martín, han adquirido especialización fuera de la región, han pasado de los negocios a la política y aspiraban a dirigir, probablemente en soterrada competencia, un proceso de renovación de élites que, en su primer momento, se dio exclusivamente dentro de los márgenes que trataba de imponer el gobierno autoritario. Otra característica común es que ambos llegan a ser jóvenes presidentes de la Cámara de Comercio de la región. Aparentemente —como ocurre ahora con su titular, Sandro Rivero, candidato al Congreso por el Frente de Centro— la presidencia de esta entidad obra como una suerte de trampolín político que le otorga visibilidad social a su máximo representante, lo que le permite luego aspirar a cargos de responsabilidad pública.

Nueva Amazonía: un movimiento regional articulado y programático

En la actualidad existen en el departamento dos movimientos regionales: Nueva Amazonía, liderado por César Villanueva, y el Frente Regional, cuyo principal dirigente es Juan Carlos del Águila. El primero de ellos parece mantener una actitud más independiente, mientras el segundo discute su integración a Unidad Nacional. Ambos movimientos dialogan entre sí y mantienen buenas relaciones a pesar de que, como veremos, en algunos de sus planteamientos revelan diferencias significativas.

César Villanueva, por medio de la actividad pública o privada, ha estado vinculado a distintos proyectos de desarrollo que se dieron en la región desde fines de los setenta hasta la fecha. Colaboró en las Corporaciones de Desarrollo departamentales, primero en los últimos años del gobierno militar y luego durante la segunda gestión de Belaunde. Trabajó en proyectos como el desarrollo del Alto Huallaga en la zona de Tocache, en Uchiza, y luego en el Alto Mayo en el Huallaga Central. Posteriormente, se traslada al mundo de las ONG, a través de su participación en el Fondo Contravalor Perú-Canadá en Lima. Actualmente se dedica a la actividad privada dirigiendo una empresa que trata de concertar entre organizaciones de productores de café, cooperativas y empresas, para tratar de vincularlas de manera competitiva al mercado internacional.

Villanueva fue uno de los fundadores de la izquierda en San Martín, a principios de los ochenta, participó incluso en las elecciones integrando la Unidad Democrática Popular (UDP). Durante el gobierno de Fujimori, su intervención fue solamente como técnico y pasó a segundo plano su actividad política. El año 2001 participa como candidato a congresista por Somos Perú. Esta decisión la considera un error; en realidad, ocurrió que estaba vinculado a personas de Causa Democrática, organismo vinculado al que fuera Defensor del Pueblo, Jorge Santisteban, que se encontraba aliado al grupo político antes mencionado. Entiende que este grave error táctico lo hizo envolverse, sin saberlo primero, sin quererlo después, en los conflictos políticos al interior de Somos Perú, debilitando en última instancia lo que le interesaba en definitiva: presentar una propuesta regional.

En las elecciones regionales del año 2002, Villanueva pierde por el 2% de los votos frente al APRA. Al margen de discusiones sobre la transparencia de estos comicios, algunos intérpretes de lo que ha ocurrido, procedentes también de Nueva Amazonía, señalan que, a diferencia de este incipiente movimiento, el APRA contaba con personeros en la mayoría de mesas habilitadas y ejercía una gravitante influencia en el Jurado Electoral Especial del departamento, hechos que revirtieron a su favor sobre todo en elecciones tan reñidas.

Un discurso elaborado de propuestas de desarrollo

En la visión de César Villanueva y de César Rengifo, otro destacado integrante de Nueva Amazonía, vinculado también como el primero al mundo de las actividades del desarrollo, hay un conjunto de preocupaciones que tienen matices distintos en uno y en otro, pero que van en dirección a lo que consideran los principales lineamientos del desarrollo regional.

Entiende Villanueva que uno de los aspectos que debe apuntalarse es el desarrollo forestal en la región, evitando las prácticas predatorias que se han realizado hasta el presente. Debe, además, buscarse una adecuada política tributaria, que se encare como contraprestación por determinadas actividades en las que se comprometería la región, como la defensa de recursos naturales, el tema de la identidad amazónica cultural y la idea, en perspectiva de largo plazo, de pensar en una macroregión que integre todos los departamentos que se encuentren vinculados a la amazonía.

A diferencia del presidente de la Cámara de Comercio de San Martín, el ya aludido Sandro Rivero, Villanueva tiene una posición de reserva respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que entiende que el nivel de competitividad de la región es muy bajo. Entre otras razones, esta reserva frente al TLC se basa en las dificultades de infraestructura, que dificulta llevar los productos de la región al Pacífico de manera que no sea costosa; en que se van a imponer cuotas al sector agropecuario que este no va poder soportar; y además, en que la región se va a encontrar en condiciones desventajosas en la fijación de precios atractivos en algunos de sus principales rubros de producción.

Encuentra Villanueva dificultades de darle a su propuesta un nivel que articule lo regional con lo nacional; ello debido a que la Ley de Partidos establece que los movimientos regionales no pueden participar en los comicios en que se eligen Presidente y Congreso.

Entiende que San Martín, pese a que en teoría es rica en recursos energéticos, no ha podido constituir todavía una base hidroeléctrica sólida, como tampoco —lo que se propone desarrollar como alternativa—, ha podido aprovechar el agua a través de un sistema de pequeñas cuencas y microcuencas. Piensa que una salida para este problema se encuentra en la realización de acuerdos con distintos distritos y provincias para una adecuada administración.

Otros voceros del mismo movimiento entienden que un eventual gobierno de Nueva Amazonía debe crear las condiciones para una adecuada gerencia de la región, en que intervenga el sector privado y en que el gobierno regional no se convierta únicamente en ejecutor. Para el logro de este objetivo, se deben cumplir algunos lineamientos políticos, a su criterio fundamentales. Uno de ellos es mejorar y proseguir con el asfaltado de la carretera Marginal; otro de ellos es replantear la base productiva de la región, en la que se tiene que dar un peso a la búsqueda de mercados potenciales para el café, el arroz, el tabaco, el cacao —productos en los que aun se siente la falta de adecuados proyectos—. En la misma línea, se entiende que debe buscarse, como también insiste Villanueva, fomentar la reforestación con fines comerciales y la promoción del ecoturismo. Y en general, se propone pensar en alternativas de crecimiento de la región que tengan propuestas más imaginativas y viables.

Las tareas políticas y sociales planteadas

Nueva Amazonía tiene una propuesta relativamente articulada que no es del caso explicar en detalle. En ella se dice aspirar a la participación democrática; a la defensa de los derechos ciudadanos; a la descentralización como eje fundamental del quehacer político; al derecho autónomo de cada uno de los pueblos a decidir sobre el destino, desarrollo y uso de los recursos que ellos mismos generan; a la interculturalidad; a la idea de un crecimiento concertado, con un Estado promotor; al respeto de la diferencia; a la preocupación por la identidad; así como a ideas de justicia social vinculadas a la solución de los graves problemas existentes en la región.

Como consecuencia de los principios planteados, Nueva Amazonía persigue como objetivos contribuir al desarrollo integral y sostenido de los pueblos de San Martín, priorizando en primer lugar la educación, la generación del empleo y el uso adecuado de los recursos naturales.

En segundo lugar, se busca propiciar la integración de los pueblos amazónicos y, a la larga, promover una región amazónica en el marco de un proyecto de desarrollo, fundamentado en principios y criterios que defiendan el desarrollo sostenible.

En tercer lugar, este movimiento entiende que es necesario promover y consolidar el proceso de descentralización, tanto para una adecuada asignación de competencias, recursos y funciones, como para fortalecer la identidad y gravitar en el proceso social y económico con un impulso que parta sobre todo desde los departamentos.

En cuarto lugar, consideran que deben extender una práctica política democrática, para lo cual resulta necesario, entre otros puntos, demandar la transparencia de la gestión pública y, para que ella sea garantizada, promover la participación y la fiscalización ciudadana.

Dicen defender una economía social de mercado, que respete la iniciativa privada pero que entienda que es necesario márgenes adecuados de una intervención efectiva del Estado en sectores clave para la población —como educación, salud, vivienda y el desarrollo científico y tecnológico—, así como en la orientación general del crecimiento económico y en el destino de los sectores estratégicos. Por ello, priorizarán la pequeña y micro empresa, tratarán de hacer un proyecto educativo que incluya tanto el respeto por la calidad de la enseñanza impartida, como el seguimiento de los principios de equidad, de inclusión y de interculturalidad. Para el cumplimiento de todos estos propósitos, entienden que es necesaria una suerte de nuevo contrato social entre las autoridades y el gobierno.

Nueva Amazonía considera que debe llegarse a una integración y consolidación de la región amazónica. Para ello, debe atenderse con particular preocupación a la defensa del medio ambiente y de la biodiversidad, y a la aplicación de políticas sociales que tienen que ver con la mejor cobertura de los servicios básicos, particularmente en el aludido tema de educación y en salud. Consideran que todos estos requisitos no pueden lograrse si no se realiza un activo combate contra la corrupción.

Las dificultades encontradas en Nueva Amazonía para establecer una política de alianzas

Como ha ocurrido con otros movimientos regionales, Nueva Amazonía ha tenido dificultades para establecer acuerdos estables con otros movimientos regionales y con partidos nacionales. Con los movimientos regionales ha participado a través de Diálogo Regional y la red de partidos regionales. Pero, en una primera aproximación, daría la impresión de que, al ser una fuerza más consolidada en el departamento que otras de naturaleza emergente, lo toman como un instrumento más de su actividad política, al que no privilegian de una manera especial.

En todo caso, el espectro de los grupos con los que ha dialogado Nueva Amazonía

es amplio. Prácticamente, el conjunto de fuerzas y organizaciones políticas más significativas, desde la derecha con Unidad Nacional hasta diversos grupos de izquierda y recientemente Ollanta Humala, ha establecido contactos con el movimiento, siendo prácticamente el APRA y los grupos afines al fujimorismo, las únicas organizaciones con quienes no han establecido ni les preocupa establecer una negociación.

No parece haberse concretado una alianza definitiva. Probablemente, como veremos que ocurre también con Fuerza Social en Cajamarca, privilegian el espacio regional. Cuentan a su favor para ello con dos hechos: haber perdido en las elecciones del año 2002 por el escaso margen del 2% y el desprestigio de la gestión aprista. Es sabido que el presidente regional del APRA, Max Ramírez, cometió un conjunto de actos irregulares, como el uso de un grifo para abastecer de combustible a camiones y autos del gobierno regional, que eran propiedad del hermano del presidente; la llegada de una cantidad irregular de computadoras a su administración, presentada bajo la simulación de una compra a crédito; los abusos de la esposa de Ramírez, Eliana Castillo, que utilizaba fondos de la región para adquirir objetos para su uso personal, desde productos domésticos hasta medicamentos para mascotas; y compras ficticias de repuestos, de llantas y maquinaria pesada para las obras de mantenimiento de la carretera Tarapoto-Yurimaguas.

Es un gobierno que vivió bajo la presión de un conjunto de juicios que parecen bien fundamentados jurídicamente. Es sustituido luego, y en un proceso que dura varios años, por el vicepresidente regional, Carlos Cárdenas, pero el APRA no consigue superar una situación de aislamiento y de descrédito, aun cuando en oportunidad de comprobarse las flagrantes irregularidades del presidente regional, el partido que lo invitara como candidato tratara de marcar de modo inequívoco sus distancias con aquel a quien promovió al mayor cargo de responsabilidad política regional.

Una tendencia fujimorista convertida en movimiento regional

Juan Carlos del Águila, a quien ya hemos visto destacado como presidente de la Cámara de Comercio y presidente del CTAR, constituyó por su parte su propio movimiento, el llamado Frente Regional. Del Águila es un profesional que no parece haber marcado definitivamente distancias con lo que fuera su vinculación con el régimen autoritario. Entiende que Fujimori cumplió un papel decisivo, no solamente en la política general del país, sino particularmente en San Martín, donde, estima, llegó a asignar 450 millones de dólares en inversión pública, lo que cambió sustancialmente la situación regional, con un trabajo muy sostenido y eficaz en obras tales como la infraestructura de riego, la cobertura eléctrica y la política educativa.

A la vez que destaca este hecho, hace notar la falta de transparencia del fujimorismo y destaca los episodios que denotaban la falta de conocimientos correctos en la aplicación de estos lineamientos de desarrollo. Se distancia de Rolando Reátegui —como hicimos notar nos da la impresión de que siempre fueron competidores— cuando este apoya a Solución Popular, que postulaba la candidatura de Carlos Boloña, entendiendo que el gobierno se encontraba aislado, que se trataba de una opción arriesgada y no iba a tener vigencia en el futuro. Al igual que Arturo Maldonado, actual congresista por San Martín, pasa de estar vinculado, aunque no de manera tan activa como lo hiciera Reátegui con Vamos Vecino, a establecer un contacto con Unidad Nacional y muy particularmente con la figura de Lourdes Flores.

Entiende que su movimiento Frente Regional tiene vigencia en un conjunto de organizaciones provinciales. Es el caso del movimiento Obras en Saposoa, en la provincia de Huallaga; el movimiento Unidos por Moyabamba, en Moyabamba; el movimiento Participación y Desarrollo en Bellavista; un conjunto de independientes que postularon por Unidad Nacional en diversas zonas; y personas inscritas en la Unión por el Perú

(UPP) en Lamas que acompañarían su propuesta.

Lo fundamental a realizar, a su criterio, es promover una agresiva política de inversión en infraestructura, garantizando para ello la necesaria estabilidad jurídica y la seguridad ciudadana. Además, en otros planos, propone reestructurar el aparato de Estado y regional, que se caracteriza, a su entender, por una excesiva duplicidad o incongruencia en el cumplimiento de sus funciones, lo que produce una sostenida pérdida de recursos.

Entiende, asimismo, que en educación prácticamente todo está por hacerse en el departamento. Es necesario fortalecer la investigación en la universidad, promover institutos tecnológicos, realizar para ello convenios con gobiernos extranjeros y, en otro plano, promover la creación de una buena carretera que lo interconecte con Yurimaguas y le permita llegar a un mercado de la importancia que tiene el brasileño. Se preocupa más que Nueva Amazonía —lo que no quiere decir que este movimiento ignore el tema— y como destacará también el representante de Unidad Nacional en Cajamarca, por los temas de seguridad ciudadana.

Las vinculaciones con Nueva Amazonía y con partidos nacionales

Entiende que tiene buenas relaciones con Nueva Amazonía. En este movimiento existen, en opinión de Del Águila, distintas vertientes ideológicas y opciones. Considera que aun cuando sus miembros provengan en su mayoría de fuerzas que en un principio estuvieron adheridas a la izquierda y que, por lo general, promuevan un rol más activo de intervención del Estado que aquel por el cual él quisiera optar, este movimiento constituye la fuerza con la que puede dialogar en los temas fundamentales. Estima que el referente básico de su propio movimiento es Unidad Nacional y ha decidido, por ello, participar en la lista para el Congreso de ese partido. Previamente, se encontraba en el dilema de ir como candidato al Congreso en las elecciones de abril o postular como candidato a la presidencia regional o al municipio de San Martín en alianza con Nueva Amazonía.

El problema que señala es que si Nueva Amazonía no apoya a Unidad Nacional en los comicios para elegir presidente y congreso, resulta improbable que esta última organización le preste su apoyo para que el movimiento regional presente sus candidatos sin competencia y con independencia en las elecciones regionales. Bajo estos presupuestos, es que se ha dado una compleja negociación entre Del Águila, Villanueva y sus respectivos movimientos, dentro de una relación en que aparentemente cada uno, a la vez que evalúa el potencial de sus propias fuerzas, considera con respeto lo que puede aportar su potencial colaborador.

Su principal colaborador, o por lo menos el personaje político más destacado dentro de aquellos que privilegian una alianza con Unidad Nacional luego de Juan Carlos del Águila, es Mario Humberto Maynetto, que también perteneció años atrás y hasta bien iniciada la gestión de Reátegui a IDEAS. A Maynetto le interesa destacar que a la vez que acompañó al proyecto fujimorista —viene de una familia de reconocida trayectoria aprista en el departamento— ha marcado su distancia con Reátegui y quien fuera su operador político Carlo Magno Pasquel, tratando de marcar un perfil de mayor independencia. No se perciben en la entrevista que hemos realizado mayores alusiones a Nueva Amazonía. Daría la impresión de que Maynetto se encuentra preocupado y en cierto modo entrampado —si se nos permite esta interpretación subjetiva— en el cambiante juego de sus aspiraciones políticas nacionales y regionales y no parece interesarle que su movimiento regional extienda su política de alianzas.

Al igual que Juan Carlos del Águila, entiende que hay que hacer una adecuada decantación y, en ese plano, distinguir dentro de los fujimoristas aquellos que estuvieron comprometidos con actos de corrupción, frente a quienes estaban convencidos de que, a través de ese gobierno, se podía impulsar una propuesta realista y de impacto positivo en la

región. Se muestra ahora mucho más crítico de la gestión de Rolando Reátegui en el gobierno municipal de lo que fuera en sus años de gestión. Entiende que el excesivo endeudamiento generado se arrastra aún hasta el momento actual, ya que en su práctica profesional de abogado es defensor de muchos de los que quedaron en situación de acreedores impagos. En todo caso, no aparece tan marcada en Maynetto, a diferencia de Del Águila, una visión más proclive a ver las especificidades del desarrollo regional, lo que se agrega a la ya mencionada renuencia al establecimiento de una política de alianzas.

La precariedad de los partidos

En el departamento de San Martín llama la atención la debilidad que muestran los partidos políticos, por lo menos cuando tratan de formular diagnósticos regionales. Rolando Reátegui aspira a participar en las elecciones nacionales nuevamente, defendiendo el fujimorismo y el movimiento Sí Cumple. Entiende que fue un error de cálculo su alianza con Solución Popular y Boloña, al no haber percibido adecuadamente el aislamiento en que se encontraba este movimiento. Se muestra también discrepante con la sustitución como Secretario General de Sí cumple de Orellana por Delgado Aparicio, ya que, para tomar una solución de esta magnitud, debiera habérsele consultado oportunamente.

De todas maneras, considera que hay un vacío de la representación política y un descrédito de la población, que no pueden ser cubiertos por las candidaturas de Alan García, Valentín Paniagua o Lourdes Flores Nano. La gente se siente todavía vinculada, a su criterio, a los éxitos obtenidos por Fujimori en materia económica y, sobre todo en una región como San Martín —donde existiera una cruenta guerra—, en la derrota de la subversión. Entiende, además, que su organización mantiene un conjunto de cuadros locales todavía vigentes en la mayoría (o en la totalidad) de los distritos y provincias de San Martín. En buena parte, ellos se mantienen deliberadamente con un perfil bajo, pero pueden provocar un cambio sustantivo en la situación apenas se realice una adecuada convocatoria social y política.

Insiste en que en el tema de la corrupción no existen pruebas consistentes del involucramiento de Fujimori. En todo caso, sería un tema que solo le interesaría a los sectores A y B de la población y que no concita, en cambio, mayores preocupaciones en el resto de la población.

Curiosamente, en lo que parece un rasgo de la mayoría de la sociedad de San Martín, no tiene una actitud de crítica o de confrontación con Nueva Amazonía, pese a las distancias que este movimiento marca respecto a la gestión del gobierno autoritario. Parecieran existir, en el conjunto de las fuerzas sanmartinenses —no obstante las posiciones tajantes que aparentemente separan a unos de otros—, ciertos niveles informales pero efectivos de diálogo y comunicación.

A la vez que Reátegui piensa que tiene razonables perspectivas de llegar al Congreso, considera que la gestión realizada en San Martín por el gobierno de IDEAS en 2002 le asegura perspectivas de una efectiva continuidad en su gestión. A pesar de que el entrevistado tuvo en sus inicios una actitud sino de desconfianza, reticente a comunicarse con mayor amplitud, parece manejar una información comparable a la elaborada por los movimientos regionales en contraste con el discurso notoriamente menos articulado que en la región tienen los partidos políticos.

Un ejemplo de esta impresión recogida es el caso de Marcelo Arévalo, dirigente de AP que estudió Ingeniería Civil y que tiene una larga trayectoria en el partido. Arévalo, formado políticamente en esta organización, no parece tener una visión alternativa relativamente elaborada de lo que le conviene al departamento y lo que pueden ser sus propias ideas y propuestas. Más bien, parece centrarse fuertemente en lo que es capaz de articular y proponer el liderazgo de Valentín Paniagua, en contraste con lo que ocurre, por ejemplo, con Pelayo Roncal, también representante des-

tacado de AP —en el caso de Cajamarca que veremos más adelante—.

En el caso de Arévalo se presenta un discurso vago sobre la necesidad de realizar obras de asfaltado Tarapoto-Yurimaguas y Tarapoto-Tocache, junto con propuestas que no consigue fundamentar adecuadamente en torno de la piscicultura y la horticultura, unidas con alusiones que no desarrolla sobre la necesidad de crear un instituto de capacitación empresarial para los jóvenes. En cambio, parece confiar mucho más que en la necesidad de una propuesta articulada y convincente para la región, en la propia vigencia de los partidos políticos, en especial de AP y del APRA, que no parece poner en cuestión. Además, como hemos visto en otros casos, reiterando que aparentemente el apoyo de Nueva Amazonía cubre un amplio espectro de opiniones de distinta procedencia, tiene una buena opinión de este movimiento.

En el caso del Partido Popular Cristiano (PPC), la impresión que hemos tenido con dos de los entrevistados, uno de los cuales ocupa el cargo de Secretario de la Comisión Política, es que aparentemente se siente un aislamiento respecto de los militantes de su movimiento político; este sentimiento de aislamiento no resulta compensado por algunos contactos ocasionales con sus principales cuadros directivos. Si bien, como en el caso de Cajamarca, señalan como prioridades a seguir educación, salud y desarrollo agropecuario, no aparece en el desarrollo de estos temas un adecuado sustento de las opiniones aducidas. La exposición se muestra en exceso esquemática; pareciera que no pudieran ir más allá de lo someramente planteado.

Todo indica que, respecto de las alianzas políticas, Unidad Nacional, más que centrar su esfuerzo en cuadros tradicionales de su partido de escasa convocatoria, buscaría más bien acuerdos con personalidades independientes o con movimientos de su confianza. En este plano, se encuentra en primer lugar, el movimiento regional de Juan Carlos del Águila. En el caso de AP, aparece como flagrante la ausencia de cuadros políticos que puedan participar en términos de discusión de una propuesta con otros contendores. Por ello, la eventualidad de conseguir congresistas de la región depende mucho más del afianzamiento histórico de esta organización en el departamento, o de un eventual efecto de arrastre de Paniagua, en el caso de que logre hacer despegar su candidatura, que de la campaña que puedan hacer sus representantes en el departamento.

Como parece ser la situación general en la mayoría de departamentos del país, sea cual sea la fuerza de donde provengan, existen menguadas expectativas de una reelección de aquellos que fueron congresistas en el periodo 2001-2006. En todo caso, Marciano Rengifo no aparece como candidato probable a ser reelecto, por lo menos en San Martín, tanto por el aislamiento de Perú Posible como por los propios distanciamientos del congresista de los problemas de su zona, o por lo menos por las percepciones de los ciudadanos, equivocadas o no, de que ello efectivamente ha ocurrido.

En el caso de Arturo Maldonado, por lo menos en esta etapa, parece ser explícita y sincera su voluntad de retirarse de sus aspiraciones al Congreso; él prefiere delegar esa responsabilidad —y así lo ha expresado explícitamente— en la persona de Juan Carlos del Águila. Incluso si se le hubiera propuesto una reelección, hubiera tenido dificultades de tener éxito salvo que hubiera llegado nuevamente a este cargo como consecuencia de la convocatoria que habría alcanzado la candidatura de Lourdes Flores, de la que se hubieran beneficiado quienes integran sus listas departamentales.

Finalmente, Aurelio Pastor del APRA ha sido un protagonista que, si bien ha intervenido en la vida del departamento, lo que incluye la opción o el desliz de promover a Max Ramírez a presidente regional, es una personalidad que se ha proyectado sobre todo en temas de política nacional. Otra vez, si postula por San Martín, logrará eventualmente llegar al cargo de congresista más como consecuencia de la capacidad de audiencia que logre Alan García que, por lo visto, por su propio prestigio personal y político en lo que tiene que ver con la preocupación acerca de los problemas de su región.

II. LA AGITADA ACTUACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS REGIONALES EN CAJAMARCA

En Cajamarca destacan dos movimientos regionales: Fuerza Regional, preocupada sobre todo por la discusión del tema de la minería; y Fuerza Social, que parece tener una mayor capacidad de convocatoria a nivel de las distintas provincias y distritos, y cuya propuesta tiene una aspiración en apariencia más integrada respecto del desarrollo del departamento.

En la zona, la presencia de movimientos independientes es significativa desde 1994, sin que ello constituya una continuidad con la experiencia de la década anterior —más apegada a la adhesión a organizaciones políticas—. El más representativo de estos movimientos fue Fuerza de Integración Regional (FIR), dirigido por Luis Guerrero. Su principal preocupación fue desarrollar una política que, en términos de concertación, incluyera temas que consideraban los principales ejes de desarrollo y las ventajas competitivas de Cajamarca, entendiendo que ellas estaban por el lado de la ganadería, el ecoturismo, la forestación, la artesanía y la minería.

Esta primera experiencia se apoyaba fuertemente en una trayectoria afirmada en un trabajo previo con las ONG de la zona —primero con el Centro de Investigación, Educación y Desarrollo (CIED) y, luego que Luis Guerrero ganó las elecciones, en lo que sería la Asociación de Desarrollo Local (ASODEL)—, con una aparente preocupación por los problemas ecológicos y una discusión conjunta sobre temas de crecimiento económico y afirmación institucional entre la sociedad civil y el gobierno local, proceso que se expresaría en la formación de diversas mesas de concertación para el desarrollo.

Visto en perspectiva, hay dos rasgos que caracterizarían la gestión de Guerrero. Por un lado, una política —que en ese tiempo se asumía como realista y pragmática— de buscar líneas de colaboración con el gobierno de Fujimori, dado que se entendía, probablemente, que no existían condiciones para promover una política activa que se sustentara en una sostenida oposición. No obstante los diversos gestos de acercamiento con el régimen que hace la municipalidad provincial de Cajamarca, el poder ejecutivo jugará a dos planos: un cierto nivel de diálogo con las autoridades municipales y el establecimiento de una dirección de la CTAR, en manos de Francisco Arroyo, que tendrá una orientación distinta y encontrada a la de la gestión local.

La segunda novedad que enfrentará la gestión de Guerrero es que durante su período comenzará la explotación aurífera de minera Yanacocha. En ese tiempo, se entendía que era una actividad extractiva que iba a durar unos pocos años, tanto es así que el denuncio de tierras para iniciar sus labores no fue en principio significativo. Se inicia con 2 500 hectáreas, pasará a 11 mil y terminará luego en 175 mil a 12 años de explotación. Ocurrirá, entonces, que lo que parecía ser una oportunidad de aprovechamiento de un recurso que no demandaría no más de 6 a 8 años, adquirirá una proyección de 30 a 40 años. Quizás, en ese tiempo, este hecho no

era advertido ni por la empresa Newmont y Buenaventura, responsables de esta actividad, como tampoco por las propias autoridades nacionales y locales.

Lo cierto es que, tempranamente, desde inicios de la explotación minera, habrá una preocupación de Yanacocha en señalar que se trataba de una actividad no contaminante, teniendo en cuenta el conjunto de previsiones en el cuidado del medio ambiente que presuntamente se tomaban. Y, por otro lado, de parte de Luis Guerrero, se entenderá que lo fundamental a resolver, aceptando ese presupuesto, era buscar un canon efectivo que garantizara, en primer lugar, el desarrollo de la provincia de Cajamarca y de las zonas cercanas a la mina y, en segundo lugar, del conjunto del departamento.

Lo que va a llamar la atención es, como señala el sacerdote Marco Arana, que las tierras objeto de expropiación son tasadas en 80 soles por hectárea, cuando el precio de transacción en el mercado llegaba a 2 000 y 2 500 soles. Pareciera que tanto las autoridades nacionales como Luis Guerrero entendían que este era el costo que debía afrontarse por el desarrollo de la zona y que los efectos negativos de esta primera evaluación iban a ser revertidos a través del canon.

Frente a una explotación que iba a tomar más tiempo del pensado, se asiste, por un lado, al surgimiento de asociaciones ecologistas que cuestionan el modelo de desarrollo minero; y, por otro lado, al surgimiento de una fuerte oposición al Frente de Integración Regional, dirigido por Guerrero, que se traducirá en una escisión dirigida por el alcalde Manuel Vásquez, llamada Fuerza Ecológica, que participará en las elecciones municipales de 1998 —en las que será derrotada, pero obteniendo un considerable margen de apoyo—.

Al mismo tiempo que se va registrando el surgimiento de distintas organizaciones defensoras del medio ambiente —las más significativas serán ECOVIDA y GRUFIDES—, otras ONG no participarán en la protesta. Es el caso de ASPAREDUR. Guerrero utilizará como apoyo técnico una institución, como ya vimos, creada ad hoc para su gestión, llamada ASODEL, que será dirigida por el entonces teniente alcalde de su gestión, Abel Díaz.

La nueva gestión municipal y el surgimiento de conflictos de difícil resolución

Finalmente, en las elecciones municipales de 1998 triunfó el general Jorge Hoyos Rubios, convocado como candidato por el FIR de Guerrero. La situación cambia radicalmente, en el sentido de que el eje de la discusión sobre el desarrollo de Cajamarca se traslada, de la producción ganadera y el crecimiento sustentable, al tratamiento del tema de los efectos ambientales de la minería, por unos, y sus aportes al conjunto del desarrollo del departamento, por parte de otros. De todas maneras, va a haber un acontecimiento decisivo que tiene que ver con la protesta de los comuneros de Choropampa: se entiende que se ha producido la muerte de truchas en el río Porcón como consecuencia de la actividad de Yanacocha.

Desde ese momento hasta el presente, se asiste a una situación de polarización social y de versiones encontradas sobre el efecto de la minería; ello explicará el conjunto de reivindicaciones que luego tomarán, a partir de la transición democrática, los diversos movimientos regionales que actúan en la zona.

En septiembre del año 2000 se producirán las primeras movilizaciones que cuestionan el estilo de la explotación minera. En estas movilizaciones tendrán una participación destacada comuneros y estudiantes universitarios y se precipitarán escenarios de violencia como el incendio de las oficinas de Yanacocha en la ciudad de Cajamarca. Esta situación provoca una creciente preocupación en el Congreso, lo que llevará a que participen expertos en el tema, de Cajamarca, que concurren a Lima; entre ellos, el alcalde de Cajamarca, el alcalde de Bambamarca, el sacerdote Marco Arana y el biólogo Milton Deza.

Por entonces, Hoyos Rubio señalaba que quienes se oponían a la actividad de la mina eran «terroristas ecológicos» y que el tema

seguía siendo básicamente el canon. Se establece una mesa de discusión en donde se considera, entre los diversos puntos de discusión, que las prioridades son las siguientes: el establecimiento de una auditoría ambiental independiente, que evalúe los efectos de la explotación; la puesta en marcha de un laboratorio para analizar la calidad del agua a la zona; y, finalmente, la necesidad de una creciente atención ante la probable expansión de la actividad de la explotación hacia el cerro Quilish, dado que algunos expertos y la mayoría de pobladores entienden que esa zona constituía una reserva acuífera indispensable para el abastecimiento de la ciudad de Cajamarca. El tema es asumido sobre todo por las cinco provincias afectadas por la minería: San Pablo, San Miguel, Hualgayoc, Celendín y Cajamarca. Hoyos Rubio se plegará ahora a esas objeciones.

En las elecciones regionales y municipales del año 2002 ganó el APRA. El presidente regional electo, José Pita, procede de la zona de Jaén y San Ignacio, históricamente más vinculadas al departamento de Chiclayo y a la explotación arrocera, no concernidas directamente por el problema minero. Mientras tanto, la alcaldía provincial será obtenida por un candidato también de procedencia aprista: Miguel Horna.

Se producirán algunos cambios significativos. En primer lugar, una aparente actitud, tanto en autoridades regionales y locales, de negociar con la mina acerca del canon minero. En segundo lugar, la idea de que lo crecientemente obtenido por ese concepto tiene que ser invertido en un conjunto de pequeñas obras que se extenderán al conjunto del departamento y que serán cuestionadas por parte de los opositores a la gestión aprista por entender que era reducido su impacto en el desarrollo del conjunto de la zona.

De alguna manera, durante la gestión del actual gobierno regional, se repite lo ocurrido durante el gobierno provincial de Hoyos Rubio. Se desarrolla, en primer lugar, una etapa de negociación y apertura hacia las actividades que realizaba la minera Yanacocha, en tanto se concibe que dichas actividades hacían una contribución significativa al desarrollo por su propio dinamismo y por el canon que aportaban. Esta primera etapa dura hasta que, en una segunda etapa, ante las sucesivas protestas sociales, el gobierno regional y local se volverán más exigentes y habrá una mayor correspondencia entre movimiento social y autoridades, aunque se mantengan una serie de discrepancias entre unos y otros. Es en este marco que la discusión por el desarrollo aparece frecuentemente en los actores, asociada o distorsionada con la presencia minera, lo que explica parte del dinamismo que tomarán los dos principales movimientos regionales en el departamento: Fuerza Social y Fuerza Regional.

El surgimiento de Fuerza Social de Cajamarca

Fuerza Social es dirigida por Jesús Coronel, economista de vasta trayectoria política que comienza participando en el marco de Izquierda Unida en la década de los ochenta y llega a ser secretario departamental de dicha agrupación en el periodo comprendido entre 1987 y 1989. Este dirigente estuvo vinculado en sus tiempos de estudiante a Vanguardia Revolucionaria y, posteriormente, al Partido Unificado Mariateguista (PUM). Al mismo tiempo, Coronel es un economista que se ha desempeñado en la actividad privada como docente universitario, asesor a pequeñas y micro empresas, consultorías externas a ONG nacionales y locales. Fue, además, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca en dos períodos (1998-1999 y 2001-2002) y forma parte del directorio de la Caja Rural de Cajamarca.

Ocurrida la crisis de la izquierda, y durante los años del fujimorismo, Coronel trata de proyectarse como un líder social. Para hacerlo, al tiempo que inicia los primeros pasos de constitución del movimiento que dirige, se vincula con partidos políticos nacionales, ya sea para postular como congresista o para aspirar a ser presidente del gobierno regional. Como congresista, fue invitado en 1995 por Fernando Olivera para formar parte como candidato del Frente Independiente Moralizador (FIM). A juicio de Jesús Coronel, si bien estaba en la posición número 30, obtuvo una

significativa votación. Considera que no fue electo congresista porque hubo una orden de la dirección del partido —al que por entonces se había integrado como aliado circunstancial— en el sentido de que los votos preferenciales se imputaran preferentemente a las posiciones número 1 y 2; ello haría que Coronel quedara desplazado a pesar del margen de aprobación que había conseguido.

Según Coronel, fue invitado nuevamente a participar en las elecciones del 2000 y 2001, por AP, UPP y Unidad Nacional, pero entendió que no había llegado todavía el momento preciso para ingresar nuevamente en una competencia política. Lo hace finalmente el año 2002, cuando postula a la presidencia regional por Unidad Nacional, con carácter de invitado, a través de la intervención directa de Lourdes Flores. Sostiene Coronel que esta lideresa había reconocido que él procedía de una vertiente socialista, pero entendía a la vez que tenía una propuesta elaborada para el departamento, de la cual Unidad Nacional carecía, y se le concedió libertad para actuar en su elaboración, tanto en lo técnico como en lo académico.

Coronel sale en segundo lugar en las elecciones regionales del año 2002, detrás del APRA, por un margen de diferencia de 6 300 votos —aproximadamente 1% del total de electores—. Este dirigente sostiene que en algunos distritos se cometieron serias irregularidades que condujeron a la realización de elecciones complementarias. No obstante, antes que los nuevos comicios se celebraran, fueron proclamadas las nuevas autoridades. En este caso, el personero nacional de la agrupación de Lourdes Flores, Xavier Barrón, no ejerció un suficiente poder de crítica y fiscalización, lo que afectó su suerte electoral. Por ello, entre otras razones, Coronel entiende que su alianza con Unidad Nacional había terminado. Ha recogido ahora firmas para la inscripción de su propio movimiento. En un principio estuvo más ligado a la Coordinadora Nacional de Independientes que al PPC de Lourdes Flores. Finalmente, logró su habilitación legal.

La articulación de una propuesta

En contraste con otros movimientos regionales, su programa aparece relativamente definido. Se articula en torno a cuatro ejes: la democracia participativa; el gobierno democrático, equitativo y transparente; la idea de un Estado promotor del desarrollo y de la inversión privada y pública, nacional y extranjera; y una economía mixta y solidaria, entendida como el respeto al mercado, pero que implique al mismo tiempo una concertación activa con la institucionalidad estatal respecto de lo que son las prioridades fijadas en conjunto para el desarrollo departamental —que espera articularse a largo plazo con un proyecto de desarrollo nacional—. Según Coronel, su movimiento realiza en la actualidad congresos distritales, provinciales y regionales. El Comité Ejecutivo está formado por 16 secretarías y es su máxima instancia ejecutiva. Fuerza Social tiene también una secretaría de género y grupos especializados en jóvenes y discapacitados, así como una presencia sostenida en el conjunto del departamento, sobre todo en la ciudad de Cajamarca y en Cajabamba, Chota, San Marcos, San Ignacio y Jaén; su vigencia es relativamente menor en Cutervo, Santa Cruz, Contumazá y San Miguel, algunos de los principales distritos del departamento.

Confía contribuir a crear la infraestructura necesaria para el desarrollo de Cajamarca mediante una adecuada articulación vial. Considera, además, que el principal sostén del crecimiento de la región es sobre todo la actividad agropecuaria. Finalmente, espera consolidar —a través de flujos económicos donde intervengan las ciudades intermedias— un mercado que le permita vincular a los distintos distritos del departamento y al departamento con el conjunto del país y, si se presenta una coyuntura favorable, exportar.

Contra lo que generalmente se señala, y salvo en temas muy específicos, entiende que Cajamarca tiene suficiente personal técnico adecuado para afrontar los problemas de su propio desarrollo. Las trabas que ocasional-

mente coloca el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de Economía y Finanzas a algunos proyectos de la región obedecen, a su criterio, no solamente a razones técnicas —a veces invocadas con razón— sino también a trabas derivadas de la competencia política.

La interpretación de Fuerza Social del problema minero

Además, ubica el problema minero tanto en términos de los problemas ambientales que esta actividad genera, como en relación con los recursos que aporta a las comunidades locales. En ese sentido, Fuerza Social manifiesta su acuerdo con la promoción de la inversión privada, nacional y extranjera, entre ellas la minera Yanacocha, pero bajo un conjunto de condiciones. La primera es que respeten y acepten las normas establecidas en el Perú y, de presentarse el caso, las normatividades complementarias que puedan existir a nivel regional. En segundo lugar, el destino de los recursos aportados por el capital privado al desarrollo departamental —más directamente, los que conciernen a la actividad minera— debía negociarse con las autoridades nacionales y locales; se entiende que no se ha cumplido hasta ahora con esta obligación al nivel requerido. En tercer lugar, un factor a considerar de manera insoslayable es la conservación del medio ambiente, para lo cual se necesita evaluaciones técnicas imparciales que garanticen que este aspecto va a ser finalmente contemplado.

Como requisito complementario, considera que debe haber negociaciones transparentes con las empresas transnacionales, de modo que sean conocidas por el conjunto de la población y se eviten situaciones en que pueda haber tanto excesos por parte de las empresas mineras como casos de corrupción.

A diferencia de otros movimientos regionales, respecto de esta actividad extractiva, entiende que existen tres posiciones. Una primera le otorga facilidades y concesiones injustificadas a las explotaciones, que van en detrimento del desarrollo departamental y nacional. Se alinearían para Fuerza Social en esta posición el Partido APRA y las autoridades regionales y locales. La otra orientación va hacia al otro extremo, con la idea exagerada de que la minería está afectando la salud de la población, la productividad agrícola y, por tanto, debería expulsarse. Según Coronel, corresponde, como la opción aconsejable, hacer un manejo apropiado de las consultorías ambientales. Existe como antecedente el informe realizado por la consultora colombiana INGETEC, que ha realizado un conjunto de observaciones a Yanacocha, en torno de los efectos contaminantes de su actividad. Para Fuerza Social, dicha actividad debe ser objeto de una adecuada fiscalización por parte de liderazgos sociales que implique una posición más activa tanto del gobierno regional como del gobierno local —instancias que deben velar por los intereses y la salud de la población—.

Cabe señalar, en lo que parece ser un cambio en la actitud inicialmente asumida, que Fuerza Social está tratando de evaluar —según Coronel— experiencias de países en donde algunas empresas, que manejan grandes capitales y se consideran estratégicas, han permanecido bajo un esquema de nacionalización y observa con atención lo que es la experiencia chilena en relación al cobre, la cual considera amerita ser investigada. En todo caso, es una perspectiva que requiere de un cuidadoso examen y, a diferencia de otros movimientos regionales, no aventuran una conclusión definitiva. En todo caso, entienden que se debe ser exigente tanto en el tema del canon como en el de las regalías derivadas de la actividad minera.

Considera que se está creando en la región un problema de confianza que genera recelos respecto de cada uno de los representantes que toman posiciones extremas. De un lado se encuentra Yanacocha, que señala que por su tecnología de punta no genera efecto contaminante alguno. Por otro lado, las ONG ambientalistas insisten en que se está produciendo un cambio ecológico, que además afecta a la salud, de tipo irreversible. Ambas partes son vistas con distancia por la mayoría de la población. Se requiere, entonces, investigar

más seriamente el tema para definir una posición clara, con bases técnicamente bien fundamentadas, y que venza una situación de polarización social como la que actualmente existe.

Las políticas de alianzas

A criterio de Coronel, Fuerza Social tiene una orientación que va del centro a la centro izquierda. Esta orientación parte de la evaluación de lo que está ocurriendo en el conjunto de América Latina, con el predominio de la centro izquierda en Brasil y Uruguay; la presencia de Chávez, de Kirchner y de Palacios en Ecuador, que asumen posturas radicales; el alcalde de Bogotá en Colombia y el triunfo de Evo Morales en Bolivia. En este sentido, ubica a su movimiento dentro de lo que considera un cambio que se está experimentando en el conjunto de la región, en donde Fuerza Social se siente integrado.

Un problema distinto tiene que ver con su negociación con los partidos nacionales. La alianza con alguno de ellos le hubiera permitido presentar sus candidaturas a congresistas a nivel de departamento. Pero, con los grupos que siente más afines —el Partido por la Democracia Social (PDS), dirigido por Susana Villarán; el Partido Socialista (PS), cuyo líder es Javier Diez Canseco; y el Movimiento Humanista, de Yehude Simon—, si bien tienen con ellos relaciones cordiales, finalmente no se llegó a ningún acuerdo. Su prioridad no es participar en las próximas elecciones nacionales, sino esperar los próximos comicios regionales que se realizarán meses después y obtener con ello una doble ventaja. La primera es asegurar lo que considera su independencia programática. La segunda es el entendimiento de que, en el mediano plazo, considerando la articulación de movimientos regionales, se puede impulsar un movimiento nacional proclive al cambio y distanciado del centralismo limeño.

Mientras tanto, como política a seguir, Fuerza Social privilegia el diálogo con aquellos movimientos regionales que hayan conseguido su inscripción. Entre ellos, los dirigidos por Juan Manuel Guillén en Arequipa, por Robinson Rivadeneyra en Loreto, por Carlos Paredes en Cusco y por Vladimiro Huaroc en Junín. Si bien en estos dos últimos casos han llegado a acuerdos con el PDS.

Respecto de Fuerza Regional, el otro movimiento regional existente en Cajamarca, están dispuestos a establecer el diálogo siempre que estos últimos hayan dado una demostración de su efectiva vigencia obteniendo el 1% de las firmas necesarias en el departamento para conseguir su habilitación legal.

Como ocurre en la mayoría de los movimientos regionales, se oponen a la Ley de Partidos, que solo ha alentado, a criterio de Coronel y sus seguidores, organizaciones de carácter nacional. Consideran que esta disposición les restringe un margen de actuación que legítimamente les corresponde, por su conocimiento en profundidad de las realidades de su departamento, que quisieran promover en el debate en el conjunto del país.

Fuerza Regional: un movimiento crecientemente confrontacional

Fuerza Regional aparece como un movimiento integrado, fundamentalmente, por técnicos más jóvenes que los que componen Fuerza Social de Jesús Coronel —entre ellos, su presidente Javier Bobadilla—; es un movimiento que, además, tiene vínculos con el movimiento universitario. Mientras Fuerza Social mantiene vínculos informales, aunque probablemente continuos con otros movimientos regionales que han logrado su inscripción, Fuerza Regional aspira a una integración entre movimientos regionales, con una propuesta integrada y con un diálogo más sostenido en el tiempo. En ese sentido, aparece como una primera instancia de discusión Diálogo Regional, que parece tener vigencia sobre todo en el período 2002-2003, en que participan expresiones regionales de Puno, Ica, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Ancash, Chiclayo, Huancayo, San Martín y algunos dirigentes políticos nacionales que no tienen una adscripción departamental determinada.

Diálogo Regional realiza un prolongado esfuerzo de articularse con dirigentes de par-

tidos que estaban alineados en una posición de izquierda. Aparentemente fracasan, no solo en la discusión de aspectos programáticos, en la que no llegan a plasmar una propuesta común o incluso no alcanzan a comenzar a discutirla, sino en el plano más inmediato, que tiene que ver con la recolección de firmas de organizaciones políticas nacionales —el PDS y el PDD (ahora Partido Socialista)—, que les permita obtener habilitación nacional.

Pareciera notarse en Fuerza Regional, según nuestras entrevistas, perspectivas o prioridades que no parecieran coincidir o discurrir en un terreno común unas con otras. Algunos dirigentes enfatizan, por ejemplo, la producción lechera como eje de desarrollo departamental; la promoción de cadenas productivas competitivas, que incluso trasciendan el estricto ámbito departamental, y lo vinculen con Piura y Paita; y al mismo tiempo, la ampliación de desarrollos alternativos en actividades como el cultivo de la tara, caracterizado por sus condiciones relativamente accesibles de competitividad, por ser un producto de alta composición de taninos que no está suficientemente explotado en sus posibilidades de mercado, el desarrollo de la silvicultura y la producción de cuyes. En general, en el plano institucional, enfatizan la descentralización asociada a un adecuado proceso de regionalización que recién se encuentra —a criterio de quienes sostienen esta posición— en sus primeras etapas.

Entienden en esta perspectiva que debe optarse por una posición gradualista, ya que de lo que se trata finalmente es de ganar hegemonía, de modo de poder gobernar el departamento por un lapso de por lo menos veinte años. Para ello es necesario llegar a un acuerdo con Fuerza Social, dirigida por Jesús Coronel. Las estimaciones de los más escépticos en Fuerza Regional indican una relativa debilidad del movimiento: se estima que cuenta con 200 a 300 personas integradas en la provincia de Cajamarca. La misma imprecisión en la enunciación de su número indica lo precario de su nivel organizativo. En Chota son alrededor de 50 los adherentes, en Cutervo 200, en Bambamarca 70. Además, se encuentra incorporado al grupo el alcalde del distrito de San Marcos, comprometido con el desarrollo alternativo. En general, este movimiento tiene dificultades para llegar con su propuesta y consolidarse en el conjunto de los demás distritos del departamento.

Quienes mantienen una posición de expectativa y moderación en Fuerza Regional entienden que es necesario emprender una cuidadosa negociación con la empresa minera Yanacocha. Consideran que se debe garantizar que esta empresa efectivamente se comprometa con el desarrollo departamental y que se debe abrir una discusión, que por fuerza ha de ser prolongada, acerca de las condiciones en que debe intervenir el Estado y el gobierno regional en esa actividad.

Una abierta posición crítica a la actitud minera

En contraste, la mayor parte de los integrantes de Fuerza Regional parecen centrar su preocupación sobre todo en las relaciones entre la sociedad local y la minera Yanacocha, ya que consideran que es impostergable negociar desde ya las condiciones de la explotación.

Iván Salas, que parece ser un dirigente social destacado en el departamento y comprometido además como periodista con distintos órganos de prensa alternativa, considera que es necesario establecer un esquema de coparticipación en la explotación minera entre Newmont y Minera Buenaventura, que son las propietarias privadas de Yanacocha, y una intervención del capital estatal con aporte regional. Señala que, tal como entiende que se ha desarrollado en el caso chileno, es necesario promover una experiencia de *joint-ventures*, en la que el Estado participe con un 60% del capital y la empresa privada aporte un 40%.

Salas es radical en su posición, en tanto entiende que existe en instituciones como CENTRUM Católica, ESAN y otras de parecidas características, el suficiente número de

técnicos capacitados para encargarse de la administración, mientras otros integrantes de la misma Fuerza Regional coinciden en los porcentajes que deben asignarse al capital estatal y privado, pero entienden que la gestión debe quedarse en manos privadas.

La empresa minera solamente ha invertido 36 millones de dólares, para obtener una ganancia de 8 mil millones, según Salas, y desde 1988 al 2004 solamente el 3,2% de las ganancias obtenidas han quedado en el país; ello genera una situación de inequidad, por lo que se vuelve prioritario rechazar este modelo, ya que reproduce rasgos históricos de un esquema primario exportador, en donde se hace sentir la falta de una efectiva autoridad fiscal y de un control político por parte del Ministerio de Energía y Minas, que parece estar al servicio de estas instituciones privadas. Otro tanto ocurre con los sucesivos gobiernos regionales que han cedido atribuciones y competencias, por lo que es impostergable que haya un movimiento social que se encuentre en condiciones de plantear una alternativa radicalmente distinta.

Discrepancias manifiestas

Como puede advertirse, en Fuerza Regional se plantean por lo menos tres alternativas: una primera piensa más en el desarrollo integral de la región y considera a la minería como una actividad entre otras, con la cual había que revisar algunas de las condiciones mediante las cuales se desarrolla. Una segunda entiende que debe emprenderse un esquema de *joint-ventures* donde el 60% fuera controlado por el Estado y el 40% por la empresa privada. Esta segunda alternativa, a su vez, se subdivide entre quienes consideran que la gestión debe correr por cuenta del propio Estado o del gobierno regional —no quedando claro por quién se decidía finalmente— y quienes entienden que, pese a su participación minoritaria, la administración debía correr por cuenta del sector privado.

Quienes demandan la coparticipación entre Estado y sector privado, con las diferencias que hemos expuesto, invocan como fundamento que debe recurrirse al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la necesidad de la consulta previa a las comunidades nativas en caso de explotaciones mineras. En este caso, aplican dicho convenio, por extensión, a las rondas y a los campesinos de las zonas aledañas a la explotación minera.

El radicalismo del Frente de Defensa

Los grupos más radicales de Fuerza Regional están vinculados estrechamente con el llamado Frente de Defensa de Intereses del departamento y de la provincia de Cajamarca. En la provincia, el Frente está integrado por la Federación Departamental de Rondas, el SUTEP departamental y provincial, el gremio de transportistas, la Federación de Estudiantes, los clubes de madres del Vaso de Leche, algunas ONG ambientalistas y las asociaciones que representan a los tres estamentos de la Universidad (profesores, estudiantes y funcionarios). Estas agrupaciones se preocupan por denunciar lo que consideran malas prácticas periodísticas, en el sentido de que consideran que parte de la prensa está comprada por los intereses de la empresa. Sostiene su secretario Reinhard Siefert —y aquí nos apartamos de la entrevista que con él tuvimos para remitirnos a un artículo suyo donde es más preciso— que «de 1994 hasta 2004 en Cajamarca se ha constatado la muerte de truchas en especial en los Ríos Rejo y Llaucano; la existencia de aguas ácidas en el río Grande; la presencia de metales pesados (arsénico y cadmio) por encima de los niveles máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud en los ríos Porcón y Grande y la aparición de mercurio en las cañerías de agua potable de la ciudad de Cajamarca. Todos estos ríos son afluentes de la prospección minera de la trasnacional Newmont Corp (Yanacocha)».[3]

[3] Siefert, Reinhard. «Yanacocha y los conflictos sociales en Cajamarca». En Quehacer 155, julio-agosto de 2005.

Reinhard Siefert es un ingeniero agrónomo que ha escrito sobre este tema tratando de probar con diversos expedientes técnicos su afirmación. Considera, además, que no se requeriría una inversión sustantiva, solo alrededor de 70 millones de dólares, que es muy poco si lo comparamos con las ganancias que obtiene la minera Yanacocha, para superar parcialmente esta situación. Entiende además que hay una dirección regional del Ministerio de Energía y Minas, ineficiente en su gestión y que, en general, a nivel nacional, esta entidad del Estado se encuentra coludida con los intereses de la empresa.

Parece que la idea de nacionalización de la mina bajo el esquema previsto es más una iniciativa de este Frente de Defensa que de la propia Fuerza Regional, que simplemente ha acogido esta propuesta. Lo mismo ocurre con el argumento de que una situación similar existe en el caso chileno en relación con el cobre. Sostiene la dirigencia del Frente de Defensa, además, que la corrupción que ha ejercido Yanacocha sobre las autoridades es de larga data. Ya desde el inicio, en 1994, Luis Guerrero del FIR y las ONG que lo apoyaban —ASODEL y Equipo de Desarrollo Agropecuario de Cajamarca (EDAC)—, primero tuvieron un discurso crítico sobre su actividad, hasta que viajaron a Estados Unidos a instancias de la empresa y, a partir de ahí, cambiaron su discurso y enfatizaron que esta nueva explotación garantizaba que no iba a provocar efectos contaminantes.

El Frente de Defensa se atribuye el haber sido promotor de la movilización de septiembre de 2004, que va del 2 de ese mes y se prolonga hasta el 20 por la exploración de Yanacocha del cerro Quilish. Ya desde diez años atrás habían denunciado el riesgo existente, en la medida en que la zona es una reserva acuífera importante para Cajamarca. Asumen entonces que no fue una manifestación relativamente espontánea de una población campesina aledaña, sino que responde a vínculos organizativos extendidos que el Frente de Defensa ha sido capaz de promover.

Incluso el Secretario General del Frente de Defensa señala que la ciudad estaba preparada para el enfrentamiento, ya que había acopiado los alimentos y reservas necesarias para resistir dos meses a los directivos de la empresa y las autoridades provinciales, regionales y nacionales que, eventualmente, le prestaran su apoyo a la minera.

Rechazan vehementemente lo que entienden son lecturas apresuradas y prejuiciosas de alguna prensa limeña, en el sentido de que consideraban que los campesinos resistían la explotación porque lo que trataban de defender era el Apu y no consideraban como su prioridad —como efectivamente lo era— los problemas de abastecimiento de agua y los efectos contaminantes de la explotación.

En un rasgo de probable radicalismo desenfocado, el Frente de Defensa rechaza la idea de que Yanacocha no contrata cajamarquinos por no tener el departamento suficiente mano de obra calificada. Ocurre que quienes participan en la actividad minera salen de ella con problemas de salud. Este hecho se trata de ocultar reclutando personal de distintas provincias de diversos departamentos del país, procurando que, con la dispersión de los trabajadores, se pierda el efecto demostrativo de lo que ocurre con las personas que laboran en esa actividad.

Paradójicamente, mientras algunos sectores de Fuerza Regional procuran acercarse al Frente de Defensa, este tiene una actitud escéptica frente a los movimientos regionales y los partidos políticos nacionales. Si bien señalan un acercamiento con el llamado Frente Amplio que agrupa al Movimiento Nacional de Izquierda (MNI), al Partido Comunista y a diversas agrupaciones de independientes que manejan un discurso radical. A la vez, son desconfiados de las perspectivas de desarrollo productivo. Entienden que es probable lograr un crecimiento de la industria mediante cadenas productivas en algún tipo de cultivo, como la tara y la fruta, y se muestran un poco más desconfiados en lo que tiene que ver con la producción lechera, ya que consideran que el departamento se caracteriza por

el predominio de minifundios, lo que afecta los niveles de productividad relativas a esta actividad y, paradójicamente, en este caso defienden la inversión privada.

El intento de alineamiento de Fuerza Regional

Lo que ha ocurrido en el último periodo, es que Fuerza Regional —provocando una división del grupo— y el Frente de Defensa parecen haberse alineado con la candidatura de Ollanta Humala. Dos factores parecen explicar este hecho. En primer lugar, lo que hasta ahora aparece como una prédica nacionalista de esta nueva organización política, que vendría a recoger las reivindicaciones de Fuerza Regional. En segundo lugar, la propia vigencia política que esta propuesta parece tener, y la carencia de cuadros a nivel de distintos departamentos, lo que eventualmente permitiría que Fuerza Regional colocara algunos de sus más experimentados militantes en el nuevo grupo político.

Parecen conjugarse razones políticas con otras de oportunidad para tomar la mencionada opción, lo que ha traído como inmediata consecuencia la renuncia a seguir formando parte de Fuerza Regional de aquellos sectores que tenían una opción de desarrollo y una expectativa de vigencia de la organización, orientada a lo que ellos consideraban proyectos de largo plazo, y que incluso tenían una actitud de expectativa o de negociación respecto de la actividad minera.

El Partido Aprista en Cajamarca

Como se ha visto en otros departamentos, llama la atención el contraste entre un discurso relativamente elaborado y en parte propositivo de algunos movimientos regionales con respecto a otro más vago, y a veces con la sensación de ser improvisado, de los partidos políticos.

El secretario general del APRA, José Arroyo, que además es integrante de la asamblea regional, entiende que el logro fundamental de su gobierno es haber destinado los noventa millones obtenidos por el canon a la extensión de diversas obras pequeñas pero significativas en salud, educación y electricidad en la mayoría de los distritos del departamento. Este hecho, a su vez, es criticado por la oposición, por entender que no ha tenido un efecto significativo y más bien se ha incurrido en una excesiva atomización del gasto.

Respecto de la mina, Arroyo considera que han utilizado el canon entre otras inversiones significativas en construir un pabellón en el hospital regional, y haber conseguido a su vez, más allá de los recursos asignados por el Estado, que minera Yanacocha reformara el Colegio San Ramón y construyera una vía de evitamiento. Además, en contraste con lo que señalan sus adversarios, sostiene que las actuales autoridades han tenido una preocupación sostenida —y no oscilante según los niveles de movilización social— respecto de los efectos ambientales que generaba esta explotación.

Entiende, además, que una de las preocupaciones que debe resolver la región, y que solo han encarado parcialmente, es la construcción de una carretera longitudinal que articule el departamento desde su zona sur hasta llegar a Jaén y San Ignacio. Si bien el norte tiende a establecer relaciones privilegiadas con Lambayeque, y el sur con La Libertad, y podría aducirse que la mencionada vía tendría un flujo económico poco significativo, se podía producir un intercambio en el que se integrarían las provincias del norte con las del sur, a través sobre todo del interés que los pequeños comerciantes y pequeños productores tendrían en esta comunicación.

Aunque el APRA considera que falta un buen diagnóstico técnico sobre la situación de la zona, se muestran optimistas sobre la evaluación que la población ha realizado tanto de la labor del gobierno regional como del gobierno provincial centrado en la ciudad de Cajamarca y entiende que va a tener un significativo apoyo electoral, basado en tres razones: las obras realizadas por la propia gestión actual; el atractivo que puede ejercer el liderazgo de Alan García; y la tradición apris-

ta que, a su criterio, ha mostrado el departamento a lo largo del tiempo. En general, daría la impresión de que no ha logrado cuajar un discurso estructurado acerca de cuáles son las prioridades de desarrollo de la región, pese a haber estado el partido comprometido directamente en cada nivel de gobierno local, lo que le hubiera permitido obtener una experiencia y un conocimiento fundamentados sobre proyectos y prioridades.

La situación de Unidad Nacional en el departamento

Guillermo Rodríguez, candidato de Unidad Nacional al Congreso, muestra un discurso mejor estructurado que el representante del APRA. Daría la impresión de que este nivel de elaboración surge de una discusión mantenida con el núcleo de dirección nacional del PPC y de la propia coalición a la que representa, en contraste a lo que parece ocurrir con el APRA, en que sus direcciones centrales y regionales, pese a las invocaciones acerca de la consistencia del partido, parecen mantener relaciones mucho más laxas en lo que se refiere a la presentación de programas.

Rodríguez es un ingeniero civil que se ha desempeñado fundamentalmente en la actividad privada. Considera que, al margen de algunas irregularidades electorales en las elecciones regionales del año 2002, su agrupación perdió los comicios por no haber establecido una adecuada política de alianzas, particularmente con AP, dado que entre una y otra organización no parecía haber —por lo menos en el caso del departamento— diferencias sustantivas en sus planteamientos.

Siguiendo los lineamientos generales de su organización política, entiende que las prioridades que deben impulsarse para el departamento deben ser las de educación, salud, agricultura, infraestructura, desarrollo de la industria turística y, en este caso particular, las relaciones con la minería.

En educación, estima que lo primero que debe hacerse es cambiar la Dirección Regional educativa, tanto en sus sistemas y normas como en su asignación presupuestaria, así como en lo relativo al personal dedicado a cumplir con estas responsabilidades. En el caso de salud, considera que es flagrante la falta de infraestructura adecuada en el departamento, en el nivel de hospitales y postas. En agricultura coincide, curiosamente con la opinión del secretario del radicalizado Frente de Defensa, estimando que uno de los problemas que afecta la productividad tiene que ver con la extensión del minifundio. Considera que, si bien los sistemas cooperativos han sido rebasados en la experiencia histórica y la del país por su probada ineficacia, se debe buscar favorecer otras formas de unión entre ellos y promover una actividad política de crédito y capacitación, en que debiera intervenir el Banco Agrario, que no es una institución inconveniente de por sí, sino que fue desprestigiada por la mala asignación de los fondos durante el gobierno aprista de 1985-1990.

Se plantea, como en el caso del APRA y también de AP, la necesidad de una carretera de integración regional, la llamada carretera longitudinal. Si bien entiende que hay una gran diferencia en los flujos económicos y actividades en las zonas del norte, como San Ignacio y Jaén, y otras provincias como Chota, Celendín y Cajamarca, por ejemplo. En todo caso, entiende que la zona sur —y sobre todo la provincia de Cajamarca— puede justificar una interacción con aquellas orientadas a una producción arrocera y cafetalera, que buscan su salida por Lambayeque, si es capaz de ofrecer determinados servicios, fundamentalmente hospitalarios, y un adecuado funcionamiento de un mercado mayorista regional.

Considera, en el marco del proceso de integración, que no hay que apresurarse en el proceso de regionalización, para evitar decisiones que no tengan mayor fundamento técnico. Entiende que tradicionalmente Cajamarca no ha tenido una buena industria turística en términos de hoteles y restaurantes. En otro plano, señala la crítica generalizada a la gestión del gobierno actual, tanto

regional como departamental, en el sentido de que fue incapaz de invertir lo destinado por el Estado en obras de largo aliento.

Entiende que la actividad minera es necesaria dentro de un contexto general de valoración de la importancia de la inversión privada. En todo caso, considera que cualquier industria tiene efectos contaminantes y no está probado que en el caso de esta explotación extractiva los riesgos sean significativamente mayores. Señala que, en conversaciones con directivos de la mina, con los que parece estar en contacto, estos reconocen que hay un 2% de pérdida de agua para el conjunto del departamento, que surge de la explotación de Yanacocha. Una solución puede ser establecer un sistema de pozos o de trasvase de agua que discurra por otros cursos, lo que permitiría solucionar la mencionada deficiencia y ayudar a que se supere el clima de desconfianza existente.

La movilización que se generó en septiembre de 2004, cuando la mina decide hacer exploraciones en el cerro Quilish, parece haber sido de tal importancia que el propio Guillermo Rodríguez reconoce que, pese a no estar de acuerdo con las propuestas más radicalizadas, participó en la movilización a título personal para no quedar aislado políticamente, y señala que los estándares ambientales de esta explotación tienen que estar sometidos a un control internacional y de la sociedad.

Le preocupa, finalmente, como problema traído por la mina, la arrogancia en el trato respecto de la población oriunda de la zona, comportamiento que le imputa sobre todo a los funcionarios de menor jerarquía, y los problemas de seguridad ciudadana que el nuevo polo de desarrollo en la región ha originado como una de sus consecuencias indeseadas. En este sentido, debe emprenderse una agresiva política de seguridad ciudadana, en donde los comités vecinales en la ciudad y las rondas campesinas en el campo deben estar mucho más articuladas de lo que ha ocurrido hasta ahora con las comisarías de cada sitio.

Considera que Unidad Nacional ha crecido en capacidad de convocatoria en estos últimos años. Por lo menos cuatro mil personas inscritas participaron en el proceso de elecciones internas para elegir a quienes van a postular como congresistas, siendo él uno de los elegidos, con el aval de la lideresa Lourdes Flores.

Las propuestas de Acción Popular (AP)

Pelayo Roncal aparece como la personalidad más destacada y reconocida de AP, por lo menos por parte de quienes son sus adversarios políticos y es candidato al congreso por el Frente del Centro. Es un ingeniero agrónomo, experto en zootecnia, y se ha desempeñado durante más de veinte años en distintos cargos de responsabilidad en los equipos técnicos de administración municipal. Queda la duda de saber si los conocimientos demostrados en la entrevista que tuvimos con él se deben a esta peculiar experiencia profesional o a un discurso relativamente mejor elaborado de su organización respecto de otras fuerzas políticas que van más allá de esta circunstancia particular.

En todo caso, se ha desempeñado, durante el segundo gobierno de Belaunde, activamente en las instancias estatales descentralizadas de las Corporaciones de Desarrollo (CORDES). Fue electo secretario departamental durante el gobierno de transición, fue responsable del CTAR, postuló a la presidencia regional en el año 2002 y en el año 2004 fue elegido como secretario departamental de su partido.

En la responsabilidad asumida durante el gobierno de transición, considera que el principal logro de su gestión fue haber hecho un Plan de Desarrollo Regional seriamente sustentado, cuyo periodo de vigencia iba del año 2002 al año 2006, al mismo tiempo que procedía a una reorganización institucional, a un proceso de consulta sobre las prioridades en las distintas provincias del departamento, y a un trabajo sostenido con técnicos del SNIP para lograr que los proyectos que consideraba prioritarios fueran aprobados.

Valora la experiencia de concertación que iniciara en su oportunidad el gobierno de Luis Guerrero y que perdiera posteriormente, a su criterio, el curso inicial, lo que parece haber ocurrido también, a su criterio, con las Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza.

Estima que el eje fundamental de desarrollo del departamento tiene que ser el agropecuario. Cajamarca tiene un 75% de tierras de secano y los grandes proyectos de dotación de agua no han logrado beneficiar sustantivamente a la región, a diferencia de lo ocurrido con los departamentos aledaños. Ante todo, se necesita resolver una infraestructura básica de irrigación para pensar en el desarrollo a mediano plazo del departamento, y aprovechar lo que existe en relación a la explotación de cuencas y microcuencas. En esta preocupación por el desarrollo agropecuario, se trata de incentivar los cultivos andinos, en donde el departamento parece contar con ventajas comparativas, particularmente en los casos del choclo, el tarwi, la quinua y algunos frutales, trabajando bajo el sistema de cadenas productivas.

Otros de los problemas que ha atravesado el departamento son los que han afectado la producción minera y lechera, ya que ha disminuido en los últimos años la productividad de 12 litros a 5 litros por vaca. Ello ha originado que Cajamarca sea desplazada en importancia en esta actividad por los departamentos de Arequipa y La Libertad. Otra vez se necesita crear asociaciones de productores, repensar el modelo de cooperativas, estudiar modalidades de crédito adecuadas, dar un efectivo apoyo técnico, explorar mercados y tratar de evitar un asistencialismo que a la larga sería contraproducente para el desarrollo.

Roncal plantea, igual que la mayoría de los militantes de los otros partidos políticos, la necesidad de una carretera longitudinal con otras transversales que integren a las distintas provincias, según el caso, con Cajamarca o Lambayeque. Esta carretera longitudinal que atravesaría el departamento resolvería en parte los problemas de integración regional, pero para ser sustentable AP invoca la importancia de llegar al fortalecimiento de los acuerdos que se realizaron con Ecuador en el marco de los tratados de paz celebrados con ese país.

Entiende que, a largo plazo, hay que pensar en una integración regional de Cajamarca con Lambayeque, Piura y Tumbes, pero que este proceso se discutió de manera muy apresurada. Esta integración favorecería, por ejemplo, el desarrollo de mega proyectos relativos a la reforestación, al mismo tiempo que fortalecería un circuito turístico del norte, que tendría algunas condiciones de competencia con el más consolidado circuito turístico del sur del Perú.

En todo caso, no podía discutirse esta iniciativa, como se quiso hacer recientemente, si no se tenía claro quién gobernaba la macrorregión, cómo se distribuirían los representantes y de qué manera se fijarían los incentivos para la articulación entre departamentos que tenían historias diferenciadas. Su expectativa es que, finalmente, pueda llegar a constituirse la macrorregión en el año 2009.

Otra vez, lo que parece ser generalizado tanto en los frentes regionales como en los partidos políticos opositores, Roncal señala que el APRA ha ejercido clientelismo político; no ha hecho obras de largo alcance; no ha resuelto el problema de una adecuada cobertura eléctrica que resulta prioritaria para el departamento. Por todo ello, la actual gestión aprista le merece severos cuestionamientos.

En general, Roncal, como el conjunto de entrevistados de partidos políticos, parece reconocer la existencia y la vigencia de Fuerza Social y, en cambio, ignorar directamente o relativizar la importancia de Fuerza Regional, si bien, uno de sus dirigentes, Iván Salas, es reconocido como una personalidad política del departamento, pero más como un dirigente social radical que como articulador de una organización alternativa.

III. LA RELATIVA VIGENCIA DE LOS PARTIDOS EN LORETO Y LA ECLOSIÓN DE LOS MOVIMIENTOS REGIONALES

Los movimientos regionales en Loreto han tenido una sostenida vigencia desde décadas atrás. Estos movimientos han esgrimido demandas relativamente diferenciadas si se las compara con otras manifestaciones en el conjunto del país y, en buena medida, su situación es relativamente desconocida, en parte por la carencia de estudios sobre el tema, en parte por la propia insistencia de los protagonistas de estos grupos en destacar la singularidad de su situación, lo que resiste el establecimiento de fáciles o apresuradas comparaciones. Un hito importante para acercarnos a la historia política del departamento en las últimas décadas es la formación del Frente de Defensa del Pueblo de Loreto en el año 1978; este organismo fue creado para la defensa del canon petrolero. Si bien hay antecedentes de movimientos con parecidas reivindicaciones, como antes ocurriera con el caucho, el descubrimiento del petróleo en el año 1971 fue percibido como una nueva oportunidad para el desarrollo económico de la región. Las distintas vertientes políticas de la zona coincidieron en enfrentarse al gobierno de Velasco para impedir que se construyera el oleoducto que conduciría el petróleo a la costa. Se entendía que ello limitaba las posibilidades de llevar a cabo procesos de industrialización del nuevo recurso al interior de la región.

Las principales agrupaciones políticas de la época eran, por aquel entonces, el APRA, el PPC, AP, los núcleos de izquierda de Vanguardia Revolucionaria, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Patria Roja y el Movimiento Regionalista Loreto (MRL). Esta última agrupación estaba constituida por un grupo de profesionales, sobre todo por abogados influidos por el social progresismo; su principal representante fue el abogado Jorge Donayre Lozano. Era la única agrupación, en ese momento, que se había creado para levantar como prioridad reivindicaciones exclusivamente regionales y esta característica le permitió obtener un considerable arraigo popular.

Al construirse el oleoducto y fracasar la demanda, las fuerzas políticas plantean, entonces, que se promulgue una ley de canon petrolero que permitiría que una parte de las ganancias se quedara en la región. Recién en 1976, el gobierno de Morales Bermúdez daría una ley de canon que le otorgaba a Loreto una recaudación del 10% del valor total del petróleo. Transcurrido un año de la promulgación, se da inicio a la lucha para que se cumpla con el pago ofrecido. En esa coyuntura, se conforma el Frente de Defensa de Pueblo de Loreto, institución que congregó a todos los partidos políticos de la región articulados por la defensa del canon.

Un año después, el Frente empieza a debilitarse debido a la hegemonía que la izquierda había tenido en la dirección de la organización y el desprendimiento de AP de esta iniciativa, lo que debilitó en parte la activa intervención de una extendida trama de organizaciones. Para tratar de superar esta di-

ficultad, se impuso una reorganización que se expresó en la elección de Antonio Donadio Lagrotte como presidente del Frente. Donadio era un reconocido miembro del PPC que había sido presidente de la Cámara de Comercio, pertenecía a la clase alta de la ciudad y a la vez mantenía buenas relaciones con los diferentes sectores políticos. El consenso que representó le permitiría ser presidente del Frente hasta mediados de la década de los noventa.

La década de los ochenta

En las elecciones de 1980, en Loreto, como en otros departamentos de la selva del país, Belaunde recibió el respaldo mayoritario. El abrumador apoyo que el pueblo de Loreto le concedió se sostuvo principalmente en su compromiso por hacer cumplir la ley del canon. Sin embargo, a un año de iniciado su gobierno, la ley seguía sin ejecutarse. La presión que ejerció el Frente tuvo esta vez mejores resultados que con el gobierno militar y, en el año 1981, se logra establecer una fórmula de consenso para calcular el canon y se firma con el gobierno un plan vial para la región. A partir de ese momento, ingresaron recursos considerables a Loreto que permitirían encarar en nuevos términos su desarrollo económico y social.

Durante la década de los ochenta, el predominio de AP y del APRA se reflejó en las elecciones parlamentarias y en las elecciones municipales. En 1985, IU hace una alianza electoral con el MRL y la importancia de la primera de estas fuerzas en ese momento dentro del escenario del país hace posible que la coalición de izquierda alcance un escaño llevando como diputado a Antonio Donadio que, debido al alejamiento del PPC de la lucha por el canon durante esos años, había llevado a este dirigente a abandonar esta última agrupación. A pesar del protagonismo de la izquierda y la aparente mayor presencia del Frente, Donadio sería el único candidato de esta vertiente en Loreto que lograría un triunfo electoral que le permitiría proyectarse al plano nacional.

Durante el gobierno de Alan García, la mayor parte de lo conseguido por el movimiento social se perdió. Se reemplazó el dinero que ingresaba del tesoro público a Loreto por los ingresos de canon petrolero —que hasta esa fecha había funcionado como un complemento del presupuesto y no como recurso ahora poco menos que excluyente—. A pesar de los intentos del Frente por cambiar la situación, no se obtuvo resultados sustantivamente favorables y la organización se iría debilitando. La presencia del APRA, por otro lado, se expresó en esos años en gobiernos en la alcaldía provincial de Maynas durante dos periodos consecutivos.

En 1989, el FREDEMO gana el Municipio de Maynas llevando como alcalde a Silfo Albán, un empresario destacado de la ciudad que provenía de las filas de AP. Posteriormente, debido a pugnas al interior del partido por la renovación de las dirigencias y el acceso a cargos como candidatos, Silfo Albán decide formar el movimiento local Voluntad General Amazónica (VOGA). Antes de concluir su mandato, muere y deja en su lugar a su teniente alcalde Jorge Chávez Sibina, quien en 1995 tentaría con éxito la alcaldía de Maynas. En 1993, AP gana las elecciones con la figura de otro notable de la zona, Joaquín Avenzur, empresario maderero y antiguo militante de AP. Todos los alcaldes electos para la capital departamental habían tenido filiaciones políticas que tenían un origen populista o aprista y, de una manera u otra, habían llegado al poder a través del membrete de un partido nacional, aun cuando lo hubieran podido hacer como representantes regionales.

En las elecciones generales de 1990, Loreto dio un apoyo mayoritario al FREDEMO, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Las elecciones parlamentarias de ese año llevaron por primera vez al Congreso a Jorge Donayre Lozano por el Movimiento Regionalista Loreto. Los años que seguirían estarían marcados por el debilitamiento de los partidos políticos y el surgimiento de nuevas agrupaciones de origen local y regional, como serían Nueva Amazonía, Fuerza Loretana y Unidos por Loreto (UNIPOL).

Cuadro 1
Elecciones generales 1980-1985-1990 en la región Loreto

Resultados presidenciales			Resultados congresales
1980	AP APRA	66.07 % 24.63 %	5 diputados 2 diputados
1985	APRA AP IU	48.09 % 26.35 % 17.12 %	3 diputados 1 diputados 1 diputado
1990 (1v)	FREDEMO APRA Movimiento Regionalista Loreto	52.98 % 21.07 %	3 diputados 1 diputado 1 diputado

Fuente: ONPE.
Elaboración propia.

Cuadro 2
Agrupaciones políticas y alcaldes de la municipalidad de Maynas
1981-1995

Año	Agrupación política	Alcalde electo
1981-1983	AP	Luis Lozano Lozano
1984-1986	APRA	Jose Rony Valera
1987-1989	APRA	Máximo Meléndez Cárdenas
1990-1992	AP-FREDEMO	Silfo Albán del Castillo
1993-1995	AP	Joaquín Avenzur Araujo

Fuente: Tuesta Soldevilla, Fernando. Perú político en cifras, 1821-2001.

Los movimientos regionales de Loreto en los años noventa: el caso de Nueva Amazonía

Durante el gobierno de Fujimori, el Frente abandona definitivamente el tema del canon y asume la lucha por la soberanía y contra la privatización de Petroperú y del puerto de Iquitos. En el año 1995, a partir de la guerra del Cenepa, el tema de la soberanía se volvería central y llevaría al Frente a cambiar su nombre por el de Frente Patriótico de Loreto, como se llama hasta el día de hoy. Con apoyo e impulso de sectores de izquierda, principalmente de Patria Roja, y también del APRA, el Frente reiniciaría sus actividades en 1995 con una relativa participación de las demás agrupaciones políticas. La crisis de los partidos tendría como consecuencia una gran dispersión que se expresaría también en el Frente cuya dirección terminaría recayendo en

Patria Roja —partido que actualmente hegemoniza el movimiento—.

En 1995, Nueva Amazonía gana las elecciones municipales. Jorge Chávez Sibina, su principal representante, sería el primer alcalde del municipio de Maynas electo por un partido regional independiente. Chávez Sibina estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) y contaba con una experiencia previa como alcalde cuando tuvo que reemplazar a Silfo Albán luego de la muerte de este. Fue miembro del PPC y renunció para formar su propio movimiento. Durante su gestión, en 1997, fue presidente de la Asociación de Municipalidades de Loreto.

Con el movimiento independiente Nueva Amazonía se inaugura una nueva etapa en la región, a partir de la cual se cristaliza el predominio de grupos independientes frente a los partidos políticos. En 1995, los resultados de las elecciones presidenciales le daban el triunfo en primera vuelta a Alberto Fujimori. Esta vez, el apoyo de Loreto a Fujimori fue mayoritario y se expresó en el 53,95% de votos que le otorgó Loreto, frente al 25,47% que obtuvo el candidato de UPP.

La gestión de Chávez Sibina transcurrió aparentemente sin mayores complicaciones. En las siguientes elecciones municipales, haría un vano intento de reelección pero esta vez integrando, en calidad de aliado, la agrupación Somos Perú. Ese cambio iniciaría el camino que años después lo llevaría a lo que es hoy el movimiento Perú Ahora encabezado por Luis Guerrero, luego de llegar al Congreso en las filas de Perú Posible en las elecciones generales del año 2001.

Las elecciones de 1998: la formación de Fuerza Loretana y la alianza con UNIPOL

Iván Vásquez es un reconocido empresario de la región, dueño de un grupo de empresas llamado Astoria. Este grupo está conformado por un grifo, una fábrica de tejas y una emisora radial. Trabajó durante años en Petroperú e inició su militancia política a fines de los años ochenta cuando es invitado a formar parte del Movimiento Regionalista Loreto y postula, junto con Jorge Donayre, a las elecciones parlamentarias de 1990. Luego de esa incursión fallida, funda el movimiento independiente Fuerza Loretana en 1992 y, en 1995, postula a la alcaldía de Maynas y pierde las elecciones frente a Chávez Sibina. Durante la campaña, Iván Vásquez encuentra un nuevo grupo político local recién conformado y con capacidades organizativas importantes que provenía de las vertientes de la Izquierda Unida: UNIPOL. Meses antes de las elecciones de 1995, Fuerza Loretana y UNIPOL forman una alianza que en ese momento no logra llevarlo a la alcaldía, pero que se convierte en el primer paso que le permitiría luego a Vásquez acceder al municipio de Maynas en las elecciones 1998.

La crisis de la izquierda y la formación de UNIPOL

El origen de UNIPOL se encuentra asociado a la crisis de la izquierda en el Perú. En los años ochenta, el PUM era la fuerza principal de Izquierda Unida en Loreto. Su fortaleza radicaba en el arraigo que tenía, en primer lugar, en el movimiento campesino, principalmente en los distritos de Indiana, Mazán, Las Amazonas y Fernando Lores, pertenecientes a la provincia de Maynas, y, en segundo lugar, en el movimiento estudiantil a través de la Federación de Estudiantes de la UNAP. Luego de las rupturas del PUM, en 1988 y en 1993, se produjo una gran dispersión de la militancia y se va perdiendo la relación orgánica con los gremios. Solamente quedó un grupo pequeño del núcleo original de Vanguardia Revolucionaria. Los militantes que se fueron en la última ruptura con la Corriente Socialista no logran sostener una actividad que les permitiera seguir articulados alrededor de esa organización y el grupo se fue disolviendo. Patria Roja, por su parte, se mantuvo en la dirección del movimiento magisterial con el SUTE de Loreto.

En ese contexto, aproximadamente en 1995, Elisbán Ochoa —un ex militante del

PUM que había sido alcalde del distrito de Indiana por IU en dos períodos durante los años ochenta— junto con otros ex militantes de la misma organización que estaban vinculados a los cuatro distritos que habían conformado el bolsón de la izquierda en Maynas, deciden articularse y formar UNIPOL con miras a las elecciones municipales.

La creciente influencia de Robinson Rivadeneyra

Luego de las elecciones municipales de 1995, la alianza entre UNIPOL y Fuerza Loretana se fortalece y se inicia un trabajo dirigido a organizar Fuerza Loretana para las elecciones municipales de 1998. Para esa labor, la dirigencia de UNIPOL decide que sea Robinson Rivadeneyra quien trabaje directamente con Iván Vásquez y que, a su vez, sea el nexo con el conjunto del movimiento local.

Rivadeneyra es una figura muy controversial, según la opinión que hemos recogido de los principales líderes políticos de la región. Su trayectoria genera una gran desconfianza y son recurrentes las referencias a hechos que le restan credibilidad, incluso hay acusaciones de comisión de presuntos actos irregulares que lo llevan recurrentemente a formular desmentidos que no consiguen persuadir a sus detractores. Llega a UNIPOL a través de Elisbán Ochoa con quien había mantenido contacto cuando este era alcalde en Indiana y la empresa constructora de Rivadeneyra, KHAMUS, prestaba servicios al municipio. Se había dedicado a la vida empresarial durante los años ochenta luego que dejara la vida política al ser expulsado en dos oportunidades, primero de Vanguardia Revolucionaria a fines de los setenta, y luego del PUM en 1986, debido a cuestionamientos sobre el uso de recursos del partido. Estudió Filosofía y ciencias sociales en la ciudad de Lima, y formó parte de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC), lo que le ayudó a integrarse a la militancia dentro de Vanguardia Revolucionaria en los años setenta.

Durante su actividad política en la izquierda, se caracterizó por ser un hombre de «aparato», un organizador que no formaba parte de las figuras públicas de mayor relevancia. Su habilidad en esa línea de actividad era reconocida y se valió de esa experiencia para buscar el fortalecimiento de la organización de Fuerza Loretana. Emprendió una campaña, aparentemente de mucha fuerza y convicción, para retomar los contactos de izquierda en los barrios. Su práctica política era útil para la organización del movimiento, mientras que el pragmatismo de Iván Vásquez permitía que la propuesta se masificara y se expresara luego en votos. Esa combinación fue uno de los factores que les permitió llegar al municipio de Maynas en 1999.

El triunfo de Fuerza Loretana y el posterior afianzamiento del Frente Patriótico

Iván Vásquez venció con un 46,16% a Jorge Chávez Sibina, quien postuló como candidato de Somos Perú y obtuvo el 38,73%. Durante la campaña, Vásquez fue acusado de recibir apoyo del presidente Fujimori. La propia candidata de Vamos Vecino, denunció en algunos medios de comunicación que el gobierno no la estaba apoyando a ella sino a Vásquez. Fujimori pudo haber evaluado las pocas posibilidades de un triunfo de Vamos Vecino en Loreto, que obtuvo tan sólo el 5,37% de los votos, y podría haber visto en Vásquez una persona que le daba el espacio necesario para tener injerencia en el municipio.

Una vez en el gobierno local, la mayoría de militantes de Fuerza Loretana entraron como funcionarios y Robinson Rivadeneyra optó por convertirse en asesor de Iván Vásquez. UNIPOL se disolvió al interior de Fuerza Loretana y sus militantes pasaron a formar parte de ese movimiento; algunos de ellos, incluso, ganaron alcaldías distritales bajo ese rótulo.

Durante la gestión de Iván Vásquez, la lucha por la soberanía fue cobrando mayor importancia debido al desconocimiento que el gobierno de Fujimori pretendía hacer —a criterio de un conjunto de actores significativos de la región— del Protocolo de Río de Ja-

neiro, llevando a cabo un nuevo acuerdo con Ecuador que entendían que beneficiaba al país vecino en desmedro de los intereses nacionales. El alcalde Iván Vásquez participó en las reuniones del Frente Patriótico, que consideraba este tema; sin embargo, su imagen estaba muy asociada a Fujimori y no logró acceder a posiciones de liderazgo significativo.

El conflicto alcanzó su momento más álgido el 24 octubre de 1998 cuando, en oposición a la firma del tratado de Itamaratí, un gran número de pobladores interrumpieron un mitin que el gobierno había organizado para celebrar el nuevo tratado. La protesta se desbordó y terminó con la muerte de tres personas cuando el automóvil donde iba el presidente del CTAR, Tomás Gonzáles Reátegui, embistió contra ellas mientras intentaba huir de la multitud. La protesta trascendió la reivindicación nacionalista y fue también una de las primeras grandes manifestaciones contra el gobierno de Fujimori. En ese contexto, el Frente se fue convirtiendo en el espacio fundamental para lo que sería la lucha contra la dictadura de Fujimori en los años que seguirían.

Las elecciones del año 2000: la alianza de Fuerza Loretana y Perú Posible

El primer mitin multitudinario de Alejandro Toledo durante las elecciones de abril de 2000 fue en Iquitos. En ese momento por primera vez se veía un apoyo masivo a un candidato que no era Fujimori. El prestigio que el Frente Patriótico de Loreto se había ganado desde la protesta de octubre era la mejor plataforma que el candidato Toledo pudo encontrar para ganar audiencia y adhesiones en la región.

En 1999, Loreto era ya un departamento mayoritariamente antifujimorista y Fuerza Loretana conformaba el movimiento regional más importante de la región. Iván Vásquez y Robinson Rivadeneyra evaluaron la capacidad de crecimiento que podía tener Alejandro Toledo y decidieron apoyar con toda su capacidad de convocatoria la candidatura de Perú Posible. La alianza resultó un éxito. Luego del mitin de febrero en Iquitos, Toledo sería recibido a plaza llena en otros lugares del país. En abril, la región dio su apoyo mayoritario a Alejandro Toledo con un 49,68%, mientras que Alberto Fujimori obtuvo el 34,5% de los votos. Ese respaldo lograría llevar al Congreso a dos representantes loretanos, Antonio Palomo y Robinson Rivadeneyra, quienes postularon en la lista de Perú Posible. No mucho tiempo después, Antonio Palomo pasaría a convertirse en el primer tránsfuga en pasarse a las filas del fujimorismo. Robinson Rivadeneyra, en cambio, se destacaría por su investigación sobre los hechos de la Marcha de los Cuatro Suyos y el incendio del Banco de la Nación.

Algunas personas señalan que, en ese momento, Iván Vásquez «se acomodó» en el nuevo gobierno de Fujimori y que habría estado al tanto de las negociaciones que el oficialismo estaba haciendo para comprar congresistas. Sin embargo, este hecho nunca quedó claro y, oportunamente, Vásquez hizo público su deslinde con Fujimori el mismo día que este abandonaba el país en noviembre del año 2000.

La asociación que la gente hizo entre Fujimori y Vásquez en los meses del transfugismo provocó la ruptura de la alianza entre Perú Posible y Fuerza Loretana. Para las elecciones del año 2001, Toledo ya no buscaría el apoyo de Vásquez ni de sus allegados. Fuerza Loretana se alía entonces con UPP y Robinson Rivadeneyra y Elisbán Ochoa postulan al Congreso sin mayor éxito. Ese año la elección de congresistas se hizo por distrito múltiple y ya no por distrito nacional. A Loreto le correspondían tres escaños que fueron ocupados por Jorge Luis Mera Ramirez del movimiento independiente Somos Perú – Causa Democrática, Carlos Alberto Almerí y Jorge Chávez Sibina por Perú Posible.

La disputa electoral entre Fuerza Loretana y UNIPOL

A Robinson Rivadeneyra los réditos políticos que intentó obtener con su gestión parlamentaria no le permitieron alcanzar nue-

vamente un escaño en el Congreso, pero sí le sirvieron para buscar la presidencia del gobierno regional. Sobre la base del prestigio ganado en su gestión parlamentaria, que el mismo Rivadeneyra califica de exitosa, decide romper la alianza con Fuerza Loretana y reagrupar, junto con Elisbán Ochoa y Sara Olivera, a los cuadros de UNIPOL que prácticamente había desaparecido al interior del movimiento al que ahora cuestionaban. Consiguen la inscripción y deciden postular a las elecciones regionales en el marco del nuevo proceso de descentralización.

El reagrupamiento implicó llevar a cabo una política de alianzas con grupos locales independientes de distintas provincias, entre las que figuraron Nauta y Contamana. Esta estrategia llevó a UNIPOL a agrupar a mucha gente dispersa que provenía de AP, PPC, e incluso del APRA. Sin embargo, la alianza principal, para fines organizativos, fue la que se hizo con el Bloque Popular Amazónico (BPA).

El Bloque Popular Amazónico

Este movimiento se empieza a organizar aproximadamente en el año 1997. Lo constituía un pequeño núcleo de personas, algunas vinculadas a sectores de izquierda, colectivos estudiantiles como lo fue en su momento Raíces, y algunos representantes de gremios de transportes. El componente más radical del grupo tenía que ver con la presencia de algunos ex militantes de Sendero que habrían formado parte de lo que fue la columna que operó en la zona durante los años ochenta. Uno de los acontecimientos principales que se produjo en Loreto alrededor de la lucha armada fueron los hechos de Lagunas que terminaron con la detención de un conjunto de dirigentes de izquierda y de Sendero Luminoso; estos dirigentes fueron sometidos a torturas por parte de los efectivos militares que actuaban en la zona.

Para el BPA, la alianza con UNIPOL significaba ampliar su espacio de acción en una coyuntura —las elecciones regionales— que, según su apreciación, abrían una nueva expectativa para disputar en el campo electoral la realización de cambios profundos orientados a ganar una mayor autonomía para la región —autonomía que el proceso de descentralización parecía augurar—. Para UNIPOL, una alianza con el BPA significaba contar con un aparato con capacidad de organización importante, apuntalar un discurso más radical y darle un componente de izquierda más contundente al movimiento —componente que Robinson Rivadeneyra no estaba en condiciones de otorgarle—. Varias personas con las que conversamos señalan que Iquitos es un pueblo que vota siempre por las opciones de cambio, que difícilmente reelige a sus autoridades y que, más bien, arriesga por lo nuevo. Algo de esto sucedió también en estas elecciones. Para un pueblo que se ha sentido marginado históricamente, lo que caló más hondo en Loreto fue el discurso con ciertos rasgos intransigentes en la proclamación de la autonomía.

La propuesta de gobierno de UNIPOL estuvo hecha en gran parte por los dirigentes del BPA y los principales puntos de consenso fueron identidad, autonomía y democracia popular. La alianza se hizo bajo el acuerdo de que un gobierno regional de UNIPOL debía sentar las bases para una autonomía regional. En palabras de un dirigente del Bloque, se debía avanzar en la construcción de un poder popular que además potencie el movimiento indígena y campesino.

En ese marco, el Bloque asumió la dirección de la campaña y también formaron parte de la elaboración de la estrategia para la conformación de la plancha electoral. Fueron los dirigentes del BPA quienes lograron que Víctor Isla, regidor del municipio de la provincia de Yurimaguas en ese entonces, aceptara ser candidato a la vicepresidencia de la región. Resultaba importante electoralmente que un representante de esa provincia integrara también la plancha.

La campaña y los resultados

El triunfo de UNIPOL se debió en gran medida a la fuerza de la promesa de autonomía y a la estrategia de campaña del BPA. Se

puede decir que el BPA fue en estas elecciones, para UNIPOL, lo que UNIPOL fue en su momento para Fuerza Loretana en cuanto al aporte en lo organizativo. Su lema principal, «Poder de decisión», se divulgó mediante una estrategia de «boca a boca», de caserío en caserío. Se armó un grupo de personas motorizadas que trabajaba en la zona rural, formaron grupos que cantaban en los micros levantando el tema de la autonomía y que se articularon a las actividades del Frente, hubo gran participación de jóvenes y logró asociarse con creencias y valores arraigados en el electorado, según coinciden dirigentes del Bloque y de UNIPOL.

La campaña fue muy reñida —véase Cuadro 3—. Iván Vásquez era aun el alcalde Maynas y contaba con un aparato logístico muy apreciable. Además, su posición económica y el medio de comunicación del que es propietario parecían darle cierta ventaja. Pero en su contra jugaba el pasivo que la evaluación de su desempeño como alcalde le estaba dejando y la asociación que aun se le hacía en ciertos sectores con el fujimorismo.

La otra candidata importante fue Patricia Donayre, una abogada muy reconocida, hija del fundador del MRL Jorge Donayre, que fue por las filas de Perú Posible. Para Vásquez, fue la candidatura de Donayre la que le restó puntos, ya que es probable que, debido al origen social de ambos, compitieran por el mismo sector social pudiente de Loreto. Ni el APRA ni AP llevaron candidatos a las elecciones regionales. Los conflictos internos del partido aprista, que ya llevan varios años en la región, impidió que encontraran un candidato a la altura de los competidores.

En el campo municipal, por el contrario, el APRA tuvo éxito en Maynas y ganó con un 47,07% de los votos, dejando atrás al candidato de Fuerza Loretana, que obtuvo el 38,35%. Para lograrlo, tuvo que apelar a un

Cuadro 3
Resultados de las elecciones regionales 2002 en Loreto

Candidato	Agrupación política	Votos válidos	Votos emitidos
Robinson Rivadeneyra	UNIPOL	36,50%	33,3%
Iván Vásquez	Fuerza Loretana	31,92%	29,1%
Patricia Elizabeth Donayre Pasquel	Perú Posible	22,64%	20,6%
Jorge Sánchez Moreno Izaguirre	Movimiento Independiente Nueva Amazonía	4,94%	4,5%
Alfonso Jesús Bayro Cavero	Alianza Electoral Unidad Nacional	3,98%	3,6%
Votos válidos		100%	91,22%
Votos nulos			3,61%
Blancos			5,16%
Total de emitidos			100%

Fuente: ONPE.
Elaboración propia.

independiente, Juan Carlos del Águila, una persona reconocida en la ciudad por su labor como presidente del Rotary Club y como presidente de la Cámara de Comercio. Curiosamente, él iba a ser el candidato de Fuerza Loretana, pero por un mal cálculo de Vásquez, terminó optando por el APRA y ganando las elecciones.

La ruptura del BPA con UNIPOL

Transcurrido medio año de la gestión de UNIPOL, la alianza con el BPA se rompe. Esta ruptura tuvo que ver con dos factores. En primer lugar, tuvo que ver con la distribución de cargos al interior del gobierno regional. Para el BPA, hubo un copamiento de la gente allegada a Rivadeneyra, no necesariamente de UNIPOL. Esto le trajo problemas a Rivadeneyra también con los dirigentes de UNIPOL, encabezados por Elisbán Ochoa, que exigían mayor participación en el gobierno. El vínculo de Rivadeneyra con la gente que accede a cargos era más laboral que político, lo que le restaba al movimiento cohesión y una proyección más allá de la gestión regional.

En segundo lugar, empezaron a haber discrepancias en lo relativo a la conducción y la política que el gobierno regional estaba desarrollando. Para Robinson Rivadeneyra, había puntos sobre los que no podía transar en una negociación con el BPA y que tenían que ver con una concepción distinta del desarrollo de la Amazonía. Por ejemplo, en el tema económico, el BPA planteaba que era el Estado, a través del gobierno regional, el que tenía que invertir en reactivar el aparato productivo, mientras que para el presidente regional, eso no le correspondía a los directivos de la región, que tenían que enfocarse, más bien, en crear las condiciones para promover la inversión privada. El tema de la autonomía fue relegado, lo que motivará una de las críticas principales del BPA. Para Rivadeneyra, la explicación de esta presunta omisión es simple: el poder de decisión prometido colisionó con el marco jurídico que estaba asumiendo el gobierno y se volvía en la coyuntura una pretensión poco realista.

La ruptura no produjo mayores cambios. El vicepresidente Víctor Isla, si bien era del BPA, no planteó una oposición al interior del gobierno. Hacia afuera, el deslinde no fue percibido con claridad y el BPA siguió siendo visto como parte del cogobierno de UNIPOL. Para UNIPOL, el BPA jugaba dos cartas a la vez: una más radical, opositora al gobierno regional, que le permitía acumular respaldo en un grupo de la población, y otra menos definida, que no le hacía perder del todo el vínculo con la administración existente.

Las relaciones al interior de UNIPOL también afrontarían un rápido desgaste debido a la gestión personalista de Robinson Rivadeneyra. Las facciones enfrentadas serían las de Elisbán Ochoa, por un lado, y, por el otro, la del presidente regional junto a su asesor Carlos Esteves.

El caso de Fuerza Loretana

El movimiento Fuerza Loretana está conformado por un comité ejecutivo regional, comités provinciales, distritales y zonales. Luego están los comités sectoriales y los comités de base. Iván Vásquez calcula que son más de 4 000 comités a nivel regional y que serían alrededor de 70 000 los militantes inscritos. Luego de ganar las elecciones municipales, este grupo dice haber proseguido su trabajo organizativo extendiendo su presencia en el conjunto del departamento. Iván Vásquez considera que en los últimos años la mayor fortaleza adquirida se encuentra en la gente marginal, tanto ribereña como de los aledaños de las ciudades, que han interiorizado el proyecto del movimiento. La gestión en el municipio de Maynas sirvió, a criterio de este dirigente, para que sus postulados alcanzaran una mayor vigencia. En estos momentos, su mayor fortaleza está en Iquitos y las encuestas le dan la preferencia para las próximas elecciones de la presidencia regional.

Fuerza Loretana se califica como un movimiento social cristiano. Su propuesta de ideario parte de tres ejes que Vásquez denomina la trilogía de la emergencia: salud,

educación y nutrición, que constituyen vértices de una pirámide invertida —tales sus palabras— sobre los cuales se ordena un enfoque de desarrollo con un énfasis empresarial y técnico. Su pensamiento resalta la necesidad de profundizar una descentralización cuyo diseño tenga sus raíces en cada región y que, en este caso en particular, debe tener en cuenta la explotación de los recursos amazónicos, la valorización de su cultura, su geografía y su fauna. Sostiene que las empresas deben jugar un rol importante en el desarrollo aprovechando la ventaja comparativa que el departamento tiene en materia de biodiversidad y apuntando a una industrialización de los recursos que permita que no exporte solamente materia prima, sino productos con valor agregado. Señala, en esta línea, que debe emprenderse una política distinta, por ejemplo, con el camu camu y la madera; este último producto es vendido en la actualidad como tablones sin ninguna transformación realizada por operarios locales.

Iván Vásquez no estuvo de acuerdo con la conformación de las macroregiones. Sostiene que la integración le haría perder a Loreto la ventaja comparativa que tiene respecto de las exoneraciones tributarias y el canon petrolero, ya que una asociación con otros departamentos ocasionaría una disminución de esos ingresos al tener que compartirlos. Considera que el primer proceso de referéndum que se ha dado, y donde Loreto no participó, fue apresurado, no hubo debate y el gobierno, además, en lugar de promover una discusión sobre cómo debía darse, difundió una campaña que apoyaba el Sí sin fundamentos consistentes. Para él, lo que se debe hacer primero es que los planes se afiancen y, sobre la base de regiones más fuertes, emprender el camino de la integración de manera que pueda ser sostenible en el tiempo; además, propone que la discusión sobre la integración sea bilateral y por temas. Por otro lado, considera que el federalismo es una fórmula que debe examinarse y que siempre ha sido atractiva para los loretanos, más que la simple regionalización, que tiene vasos comunicantes muy fuertes con el centralismo. Los Estados federales, por el contrario, permitirían iniciativas de mayor aliento y el más activo desarrollo regional.

Si bien aún sus ideas no están del todo articuladas, Fuerza Loretana sí se ha preocupado por elaborar un ideario y una propuesta para el departamento. Como movimiento regional, identifica la problemática específica de Loreto y desde allí proyecta una mirada más nacional. Para Vásquez es claro que el crecimiento de su grupo debe darse en dos planos: uno a largo plazo para convertirse en un movimiento nacional, y otro que implique la participación en el nivel regional con el objetivo de fortalecer su propuesta.

Desde la fundación del movimiento, Iván Vásquez ha establecido diversas alianzas. Primero en 1995 con grupos locales como UNIPOL y, posteriormente, en dos elecciones generales (2000 y 2001), ha priorizado vínculos con partidos nacionales sin dejar de lado Fuerza Loretana. Para las elecciones generales del año 2006, Iván Vásquez ha decidido formar parte de la plancha presidencial de Fuerza Democrática, encabezada por Alberto Borea, ocupando la segunda vicepresidencia. El vínculo entre Vásquez y Borea se ha originado a partir de la defensa legal que este último ha realizado de Vásquez en relación a las denuncias que tiene pendiente sobre su gestión municipal. Esta alianza no excluye, sin embargo, su intención de postular al cargo de presidente en las elecciones regionales de 2006, en las que las encuestas le dan, al final de esta investigación, un respaldo considerable.

A pesar o quizás gracias al caudillismo de Vásquez, Fuerza Loretana ha logrado cierto arraigo en el departamento, lo que le permite tener una posición de negociación política más fuerte que grupos como UNIPOL que ni orgánicamente, ni a través de la figura de Rivadeneyra, ha logrado que su movimiento cuaje y se constituya en una alternativa consistente. UNIPOL parece carecer de la identidad que Fuerza Loretana ha conseguido a lo largo de los años. En ese sentido, para Iván Vásquez, lo que no se negocia en una alianza

es la identidad del grupo que dirige. Para los movimientos regionales, el tema de las alianzas nacionales ha venido de la mano con la estrategia a seguir en las elecciones regionales; la orientación es la de condicionar el compromiso nacional con un posterior acuerdo a nivel regional. Los partidos políticos parecen mostrarse en este último tema más cautos o reservados. Ganados por la urgencia de situarse en el ámbito nacional reservan la opinión de la actitud a asumir en los comicios regionales que ocurrirán también en el año 2006. No siempre se trata de un acuerdo entre pares, ni necesariamente el partido nacional es el actor fuerte en el diálogo entablado. En este caso en particular, la alianza entre Fuerza Democrática y Fuerza Loretana le trae mayores réditos a nivel nacional a Fuerza Democrática, que ha venido funcionando en algunas zonas como una suerte de organización franquicia, mientras que a Fuerza Loretana, le es útil para acceder a algún cargo en el Congreso, pero no le aporta mayores votos ni reconocimiento en la región.

La situación actual de UNIPOL

Como mencionamos anteriormente, el tema de la autonomía fue la base de la propuesta de UNIPOL. Ya en el gobierno, apoyó el tema de la integración regional que planteaba la conformación de la región amazónica entre Loreto, San Martín, Amazonas y Ucayali. Las maniobras de algunos de los presidentes apristas de San Martín y Amazonas, así como las trabas impuestas por el Consejo Nacional de Descentralización a los expedientes técnicos presentados, fueron los motivos por los cuales la región amazónica no se integró al referéndum de octubre de 2005. Para Robinson Rivadeneyra, de haberse dado dicho referéndum hubiera ganado el sí de todas maneras. Sin embargo, la mayoría de las fuerzas políticas de la región, como Fuerza Loretana, AP y el Bloque Popular Amazónico, estuvieron en contra de la conformación de la macrorregión, a excepción del secretario general del APRA, que manifestó su acuerdo con esta integración, si bien cabe interpretar, de acuerdo con nuestros entrevistados, que se trataba de una posición más individual que orgánica, especialmente si tomamos en cuenta la postura ambigua y luego el rechazo que tomara este partido en relación con la nueva articulación considerada. La mayoría de grupos políticos sostenía, más bien, que la prioridad era fortalecer la región dando autonomía a cada territorio.

Dentro de los problemas que Robinson Rivadeneyra identifica como prioritarios para la región, se encuentra la escasez de agua. El nivel de los ríos ha disminuido considerablemente como consecuencia del problema de la deforestación que tiene la selva alta, en Ucayali, San Martín y Amazonas, que ocasiona la acumulación de residuos en los ríos de Loreto.

El actual presidente regional señala como uno de los logros de su gobierno la reactivación del aparato productivo al impulsar una mayor producción de arroz en la región. Por otro lado, considera un objetivo que pudo llevar adelante la promoción de una política de crédito dirigida al campesino con mecanismos de incentivos, así como con eventuales sanciones en caso de incumplimiento de los pagos. Atribuye a su gobierno, además, haber contribuido al crecimiento de empleo en la región, debido entre otras razones al impacto que ha tenido el sector maderero y el turismo.

La política de alianzas

En un inicio, la aspiración de Robinson Rivadeneyra era ir en una plancha presidencial. Con la promulgación de la ley que obliga a las autoridades regionales a renunciar para aspirar a un cargo en el Congreso o a la presidencia, al evaluar riesgos y ventajas, este propósito se dejó de lado. Para él, la mencionada ley y la valla electoral son factores que han perjudicado el proceso de descentralización. Sostiene que, ante esta situación, los movimientos regionales van a tratar de tener presencia en el Congreso buscando una opción electoral con un grupo que le permita alcanzar el 4% para poder adquirir algunos de sus integrantes la condición de representantes.

En el caso de UNIPOL, sus alianzas se habían orientado hacia la confluencia de grupos de izquierda vinculados con otros movimientos regionales que formaban parte de la Mesa de Partidos Regionales junto con el PS, Avanza País, Somos Perú, UPP, el Movimiento Humanista, entre otras agrupaciones. La posición de Rivadeneyra fue oscilante: primero apostaba por una alianza de centro con Paniagua; posteriormente, apoyó la posibilidad de una candidatura de izquierda encabezada por Javier Diez Canseco; y, finalmente, se retiró de la Mesa para establecer vínculos con el Movimiento Nacionalista del Perú (MNP) de Ollanta Humala. Esta relación no se ha expresado en la elección de militantes de UNIPOL para participar en la lista del partido de Ollanta Humala por Loreto.

Las aspiraciones de Rivadeneyra colisionaron con los acuerdos de UNIPOL y se generaría una crisis al interior del movimiento. En octubre de 2005, se hizo público que Elisbán Ochoa sería el candidato para la presidencia regional. Sin embargo, luego que Rivadeneyra considerara poco conveniente renunciar a la presidencia de la región y con la promulgación de una nueva ley que le permite a las autoridades regionales reelegirse, se produjo un conflicto al interior de UNIPOL, que ya se venía gestando desde tiempo atrás, debido a la decisión de Rivadeneyra de postular nuevamente y desplazar de esa manera a Ochoa. Este último decide romper con UNIPOL junto con un grupo de militantes, e iniciar la formación de un nuevo movimiento denominado Mi Loreto. En un inicio, este grupo buscó un acercamiento con el PS que no se llegó a concretar, debido a la negativa de militantes de éste último —según señala uno de sus representantes— por lo que su expectativa se ha concentrado en las elecciones regionales y municipales.

El Bloque Popular Amazónico en la actualidad

Luego de obtener su inscripción en el año 2003, el BPA ha crecido y sus partidarios señalan tener una presencia en toda la región. Está conformado por un comité ejecutivo nacional, una comisión política y una estructura de trabajo por sectores compuesta por los comités de obreros, indígenas, y profesores. También cuenta con una estructura de trabajo por territorio con comités provinciales. Maynas, Yurimaguas y Nauta son las provincias donde más presencia tiene y, en menor medida, cuenta con participación en las provincias de Ramón Castilla, Requena y Contamana.

La consigna del BPA es la construcción de una región federal, la nueva democracia y socialismo. Plantean la necesidad de hacer «el nuevo contrato social de Loreto», que establezca una nueva relación entre Estado y sociedad. La izquierda en el Perú, en ese sentido, debe construirse desde la realidad de cada departamento y no a partir de lo nacional, como sigue siendo el estilo predominante hasta hoy. En su caso, la izquierda debe tener en cuenta el componente indígena como un tema central y empezar una unificación que busque integrar al conjunto de la amazonía.

Para el BPA, el tema de la autonomía es estratégico. Esa autonomía debe darse en relación a todos los poderes del Estado y debe estar vinculada a la construcción del poder popular, en tanto que es a la población a quien le corresponde participar en la defensa de sus recursos. Esta construcción de poder popular debe darse gradualmente desde los espacios territoriales, sin perder de vista la identificación nacional con el Perú. En ese sentido, plantean la propuesta del Estado federal como una mejor alternativa que la integración. En el tema de la conformación de macrorregiones, la opinión del BPA fue opuesta a la de Robinson Rivadeneyra. Coincidiendo con Fuerza Loretana, el Bloque planteó que Loreto mismo debía ser una macrorregión por su extensión territorial y demás características, y que el tema de la integración debía de tratarse cuando se haya construido una efectiva autonomía en cada departamento.

Para ellos, la unificación de los movimientos regionales es importante, pero posterior al fortalecimiento del propio movimiento en el departamento. La debilidad de los parti-

dos políticos, señalan, radica justamente en la precariedad de sus comités locales que no tienen una visión de la problemática de cada zona y se encuentran anclados en una mirada nacional estandarizada.

A partir de la irrupción y el crecimiento de Ollanta Humala, el BPA se ha ido vinculando con el MNP, incluso el Vice-Presidente Regional Víctor Isla acompañó a Ollanta en su visita a Venezuela, hecho que expresó una primera adhesión al candidato nacionalista. Los vínculos fueron avanzando hasta concretarse una alianza que se ha traducido en la elección de Isla como primer candidato al Congreso por la lista del partido UPP-MNP.

La situación del APRA en Loreto

Para Augusto Vargas, abogado egresado de la Universidad de San Marcos, candidato al Congreso y, actual secretario general del APRA y teniente alcalde la Municipalidad de Maynas, el surgimiento de los movimientos regionales como Fuerza Loretana y UNIPOL es consecuencia de la crisis de los partidos que se inicia con el gobierno de Fujimori. Señala que la conveniencia de estos movimientos para Fujimori pasaba por fraccionar propuestas nacionales, que eran las que levantaban los partidos políticos. Vargas reconoce que las propuestas de estos grupos recogían las expectativas más inmediatas de la población y ello les permitió enraizarse en la sociedad. Ello se dio, especialmente, en el caso de Fuerza Loretana, con mucha más fuerza que la experiencia de Nueva Amazonía cuyo líder, Chávez Sibina, dejó el movimiento y pasó rápidamente a postular por otros partidos que le permitieran acceder a un cargo nacional.

A modo de autocrítica, observa que algo que deben aprender de estos grupos es su capacidad para recoger y plantear soluciones concretas a los problemas de la gente. Justamente, señala, el carecer de lineamientos ideológicos y una propuesta programática, como los que tiene el APRA, los ayuda a actuar de manera más flexible. Si su partido recogiera parte de esa práctica le ayudaría a salir de una actitud que califica de «casi monacal» —actitud que, a su criterio, marca buena parte de su actividad política en la región—.

Desde hace muchos años, el APRA de Loreto se encuentra en crisis. Se pueden identificar hasta tres facciones divididas por disputas de poder que están relacionadas con la renovación de las dirigencias en la dirección del partido. Las disputas llevaron a colocar, luego de 16 años, un candidato independiente en la Municipalidad de Maynas. Como señala Vargas, tomaron esta opción evaluando que los liderazgos actuales en la región pertenecen a movimientos regionales pero, en el fondo, son caudillos independientes que se mueven de manera flexible en el escenario político. Por tanto, el APRA también podía utilizar una estrategia de ese tipo que finalmente le dio la victoria en el año 2002, no tanto por el partido en sí mismo, sino por el peso de la imagen que proyectaba Juan Carlos del Águila. La elección de ese candidato y de otros que no eran apristas, que fueron con él en su plancha, provocó una disputa, porque los viejos cuadros se opusieron a la candidatura.

Ya en el ámbito mismo de la gestión municipal, la presencia de los independientes ha traído algunas asperezas porque ellos actúan de manera más pragmática que aquellos que provienen del partido y responden, en este último caso, a una actitud que tiene que ver no solamente con la realización de una buena gestión sino con rígidos compromisos políticos previos con su organización política. Actualmente, el municipio atraviesa cuestionamientos debido a una acusación sobre robo de leche que habría sido encontrada en la casa de un militante aprista.

Sobre su mirada del desarrollo de la región, Vargas sostiene la importancia de mantener las exoneraciones tributarias que tiene Loreto y aspira a que estas exoneraciones se mantengan por un periodo no menor de cincuenta años y a que los beneficios de reintegro tributario se queden en la región. Por otro lado, coincide con todos los demás movimientos y partidos del departamento en la impor-

tancia de la autonomía como paso para una verdadera descentralización. Sus principales críticas al gobierno regional son que solamente ha hecho obras que le pudieran generar votos en las próximas elecciones y que sus autoridades han mostrado una actitud muy personalista.

A pesar de estos cuestionamientos, coincide en la posición integracionista de UNIPOL sobre la conformación de la macrorregión amazónica, porque a su criterio ello traería un desarrollo económico que sobre todo beneficiaría a Loreto, que históricamente ha estado aislado. Existe, opina, una unidad cultural natural entre los cuatro departamentos amazónicos con los que se planteó una unidad política de mayor alcance. Sobre la posición de Fuerza Loretana que plantea que Loreto sea una sola región, considera que es una postura «chauvinista» y electorera, que resta fortaleza a esta vasta zona que es la amazonía en el país.

Los intentos de renovación de Acción Popular

AP en Loreto se encuentra en una etapa de renovación de su dirigencia. La actual directiva encabezada por Fernando Meléndez Zumaeta proviene de grupos de la juventud de la organización. Al igual que el dirigente del APRA, el entrevistado, que es la persona mencionada, reconoce la decadencia en que los partidos políticos entraron durante los años noventa principalmente porque no representaban los intereses del pueblo, sino, a su parecer, los de una cúpula enquistada de militantes antiguos.

Los conflictos por la renovación dirigencial vienen desde años atrás. Un caso significativo de ruptura, como ya se ha mencionado, fue el de Silfo Albán que, luego de ser electo, forma su movimiento VOGA. Durante las elecciones regionales de 2002, al no presentar candidatos ni a la región ni a la provincia de Maynas, algunos militantes de AP apoyaron a UNIPOL y otros a Fuerza Loretana. La nueva dirigencia espera que, con el liderazgo de Valentín Paniagua, aquellos que se fueron vuelvan a militar en el partido donde aún están inscritos. Sin mayores comentarios en profundidad, aprecian favorablemente la alianza hecha entre AP, la Coordinadora Democrática y Somos Perú.

Se hace notar que el análisis sobre la problemática regional es muy limitado y dependiente en muy alto grado de lo que se establezca desde Lima. No hay mayores propuestas de gobierno que partan de los propios dirigentes regionales. Sus bases principales serían Yurimaguas y Requena; en Iquitos se estaría dando un crecimiento progresivo con la conformación de los comités distritales.

La situación del Partido Socialista

El PS se empezó a recomponer en Loreto en el año 2004 con la conformación de los comités partidarios gracias a la iniciativa de ex militantes del PUM. El tema principal del PS en la zona ha sido una propuesta descentralista y participativa que ha permitido congregar a nuevos militantes. Uno de sus principales líderes en la región es José Barletti, un reconocido y reputado dirigente de izquierda, proveniente de Vanguardia Revolucionaria y ex secretario general de IU. Barletti y otros dirigentes no dejaron de pertenecer al PUM ni en sus momentos más críticos o de mayor aislamiento. La evaluación que en la región se ha hecho para optar por la organización del partido parte del reconocimiento de que, en Loreto, los movimientos regionales aparecen ante la población como una forma de organización más atractiva que una estructura nacional. Ante esta comprobación ha sido necesario discutir sobre el tipo de organización política que se quiere. Según se señala, lo que el partido puede aportar es una propuesta programática y política, y una presencia sostenida que no se dé solamente en época electoral, así como un intento de vincular lo local, respetando sus especificidades, con la discusión política que se tiene que dar en el conjunto del país.

IV. CONCLUSIONES

Loreto muestra una compleja historia de movimientos regionales desde la década de 1970. Estos movimientos tienen cambiantes relaciones de acercamiento y de distancia entre ellos. Parecen existir antecedentes e historia que los muestran relativamente desvinculados con expresiones de parecidas características en otros departamentos, lo que hace que su experiencia no sea bien conocida. En la década de los setenta fue significativa la presencia del Frente de Defensa del Pueblo de Loreto, organismo que se oponía a la construcción de un oleoducto para dar salida a la producción petrolera, ya que se consideraba que este debía ser un recurso manejado prioritariamente por la región. Tratando de competir con los partidos, gravitó el Movimiento Regionalista de Loreto, que estaba constituido fundamentalmente por profesionales de la zona. Los años ochenta fueron más bien de un cierto abandono de este impulso inicial con un marcado predominio de las organizaciones políticas formales.

Durante el gobierno de Fujimori otra vez se asiste a la vigencia de estos movimientos relativamente enfrentados entre sí: Nueva Amazonía —dirigido por Chávez Sibina, quien gana las elecciones municipales de 1995—, Fuerza Loretana y UNIPOL, fundamentalmente. El momento culminante ocurre cuando, a raíz de la guerra del Cenepa, la oposición a las negociaciones entre los gobiernos de Perú y Ecuador culmina en la creación del Frente Patriótico, movimiento de abierta resistencia al titular del ejecutivo. Salvo este momento decisivo que marca un punto de inflexión, las orientaciones de algunos movimientos regionales se caracterizan por ser oscilantes y erráticas. Fuerza Loretana, por ejemplo, cuyo dirigente más reconocido es Iván Vásquez, pasará en distintos periodos de apoyar a Fujimori, a establecer vínculos con UNIPOL —de orientación más contestataria y radical—, unirse al Frente Patriótico y apoyar luego a Perú Posible, en un manejo muy flexible de alianzas políticas orientadas por criterios de oportunidades de corto plazo, presionado por lo que se consideraba que en cada momento convenía hacer. UNIPOL, por su parte, estará asociado a posiciones de izquierda en el periodo en que el conjunto de organizaciones políticas de esta orientación habían entrado en decadencia.

Perú Posible, aliado a Fuerza Loretana en el año 2000, le gana a Fujimori por un apreciable margen de 49,35% contra 34,5% de los votos. UNIPOL, dirigido por un cada vez más cuestionado Robinson Rivadeneyra, una vez separado de Fuerza Loretana gana las elecciones regionales aliado esta vez al recién constituido Bloque Popular Amazónico, movimiento que maneja un discurso ostensiblemente más radical de poder popular, reivindicaciones de una supuesta nueva democracia y proclamas de autonomía entre las que no se encuentra descontada la idea de un Estado federal. Tanto UNIPOL como el Bloque Popular Amazónico, a la vez que terminan con la alianza establecida para el gobierno, negociaron con Ollanta Humala, logrando el

BPA acuerdos más concretos que el partido de Rivadeneyra. Los partidos políticos parecen tener dificultades en Loreto y esperan más del efecto de arrastre nacional de sus principales liderazgos, Lourdes Flores, Alan García y Valentín Paniagua, que de sus dirigentes locales y de su construcción institucional en la región. A los movimientos regionales, a su vez, resulta complejo ordenarlos en una trayectoria coherente.

Lo ocurrido en San Martín resulta más sencillo de ordenar que el caso de Loreto. Durante la década de los ochenta, contó con una activa presencia de partidos políticos, organizaciones sociales y movimientos regionales, con una sostenida participación campesina, hasta que este activo proceso pierde vigencia por los efectos de la guerra interna. A principios de la década de 1990 surge el movimiento IDEAS impulsado por un grupo de jóvenes intelectuales del departamento. Lo que había tenido un inicio provisorio termina dividiéndose, ya que uno de sus principales dirigentes, Rolando Réategui, opta por alinearse con el fujimorismo y convertirse en uno de los fundadores de Vamos Vecino. A pesar de este rígido alineamiento, el CTAR en San Martín mantendrá una relativa independencia en la fijación de propuestas de desarrollo respecto de las directivas del gobierno.

En la actualidad, en San Martín, destaca la presencia del movimiento Nueva Amazonía, cuyo principal dirigente es César Villanueva, que postulara como congresista por Somos Perú en las elecciones de 2001 y perdiera en el año 2002 las elecciones regionales ante el APRA por un reducido número de votos. Su orientación es de centro izquierda y, como ocurre con otros movimientos regionales, se le plantea la opción de participar o no en los comicios presidenciales aliándose con una fuerza nacional. En este empeño ha manejado al parecer una amplia gama de probables fuerzas con las que definir un acuerdo.

El Frente Regional, dirigida por Juan Carlos del Águila, se encuentra aliado a un conjunto de movimientos distritales y provinciales, y parece estar en competencia soterrada con Rolando Reátegui con quien tiene una trayectoria comparable en tanto ambos son jóvenes profesionales procedentes de familias de notables de la región. Del Águila fue quizás más perspicaz o menos fundamentalista en advertir la crisis del fujimorismo, lo que lo condujo a no acompañar a la candidatura de Carlos Boloña y establecer progresivamente relaciones con Unidad Nacional.

En Cajamarca, surge en la década de los noventa Fuerza de Integración Regional, movimiento vinculado a Luis Guerrero, quien gana las elecciones provinciales de la capital del departamento. Es un dirigente vinculado al universo de las ONG, que le prestaron su apoyo, y que preconizara con fuerza —más allá de su efectivo cumplimiento— la idea de la concertación social y oscilara de posiciones de alianza con Fujimori a posturas de oposición. Si bien, en teoría, las principales preocupaciones de los movimientos regionales actuales del departamento tienen que ver con la producción agrícola y lechera, buena parte de las preocupaciones tanto de estos como de la población tiene que ver con las posiciones respecto de la Minera Yanacocha, explotación aurífera que en sus inicios se pensaba que iba a tener no más de una década de vigencia y que ahora se sabe que esta puede prolongarse por lo menos cuarenta años. El canon, la discusión de sus efectos ambientales, las relaciones con la ciudad de Cajamarca y las comunidades aledañas han sido motivo de encontradas discusiones de movimientos regionales y partidos políticos en la gestión de Guerrero, en la de su sucesor Jorge Hoyos Rubio y en la actual gestión aprista.

Fuerza Social, de Jesús Coronel, parece ser el movimiento regional de mayor vigencia. Su principal dirigente ha sido profesor universitario; con una trayectoria en un principio de izquierda, postuló como congresista por el FIM en 1995 y por Unidad Nacional en las elecciones regionales del año 2002. Entiende que debe asumirse una postura intermedia, orientada a un efectivo control social, sobre las actividades de la mencionada minera y se opone tanto a lo que considera posi-

ciones permisivas como aquellas otras que sostienen una oposición intransigente. Su interés parece estar orientado con exclusividad a las elecciones regionales y parece tener un plan de desarrollo del departamento y un esquema organizativo de su movimiento más elaborado que el de sus competidores.

Fuerza Regional, si bien expone una visión de conjunto sobre los problemas del departamento, parece tener su preocupación prioritaria en las actividades de la Minera Yanacocha. En el momento de realizar este trabajo, las posiciones en su interior se habían polarizado. Algunos de sus integrantes entendían que debía cumplirse sobre todo una gestión de control ambiental; otros consideraban que correspondía llegar a esquemas de *joint venture* en que el Estado tuviera una intervención mayoritaria tanto para que esta explotación efectivamente aportara sustanciales recursos al departamento como para evitar lo que estiman los efectos contaminantes de su actividad, posición que comparten con un activo Frente de Defensa de la provincia de Cajamarca. Como consecuencia de estas posiciones divergentes, sus integrantes se han dividido. En esta escisión han influido, también, interpretaciones encontradas acerca de las alianzas políticas a establecerse con agrupaciones políticas nacionales, algunas cercanas a Ollanta Humala y otras en discrepancia abierta con su orientación.

Este conjunto de movimientos ha ingresado desde el año 2002, especialmente con posterioridad a las elecciones municipales de ese año, en una dinámica por cierto difícil de ordenar en buena medida por las marchas y contramarchas de su política de alianzas. Exponerlas supone salir de los márgenes de los casos considerados —Cajamarca, Loreto y San Martín— para tener una perspectiva más amplia de interpretación. Por un lado, se asiste en el año 2002 al surgimiento de la llamada Plataforma Nacional de Partidos Regionales, que luego se llamaría Comunidad de Partidos Regionales. Algunos de los representantes de esta institución —entre ellos Carlos Paredes en el Cusco, Llapanchis en Apurímac, Juan Mendoza en Ayacucho, en una primera etapa Walter Alejos del mismo departamento y algunos dirigentes de izquierda no adscriptos a un departamento en especial— consideraban que la tarea era afirmar estas organizaciones en una perspectiva de largo plazo, que había que actuar primero región por región para afirmarse y que lo que correspondía hacer en la presente coyuntura era un conjunto de coordinaciones periódicas más de información que de articulación política —que estimaban apresurada—.

Otra instancia alternativa, Diálogo Regional, opinaba que desde ya estas agrupaciones debían aspirar a una presencia nacional destacando entre quienes asumieron esta orientación Vladimiro Huaroc de Todos por Junín, César Villanueva de Nueva Amazonía en San Martín, Javier Bobadilla de Fuerza Regional en Cajamarca, Rigoberto García de Fuerza Regional en Ayacucho, la ya mencionada UNIPOL de Loreto, José Reátegui del Movimiento de Integración de Ancash, Carlos Leyton de Acuerdo por Arequipa, Carlos Chevarría y Washington Román de Acuerdo por el Cusco, Washington Zeballos de Acuerdo por Tacna y Perú Libre y Solidario por Puno. Se estableció entre estos grupos una coordinación política más que una dirección efectiva y el espectro de opciones destacaba por su variación desde posiciones radicales, como las de Fuerza Regional de Ayacucho, a posiciones más moderadas, como las de Nueva Amazonía de San Martín. El espectro de alianzas —hasta donde hemos conseguido entender— se caracteriza por posiciones que, si en todos los casos no están directamente enfrentadas, no terminan por alcanzar posiciones congruentes compartidas. Algunos grupos parecen sentirse más cercanos al PDD (Partido Democrático Descentralista) —luego Partido Socialista—. Otros grupos buscaban una integración más ambiciosa en Valentín Paniagua, antes que este formara el Frente del Centro sobreestimando acaso la incidencia política de esa organización. Otros tomaban como referente a Yehude Simon y su Movimiento Humanista y opinaban, en algunos casos, que lo que correspondía era que más que constituir una organización cen-

tralizada debía contribuirse a constituir organizaciones autónomas en cada departamento. Finalmente había quienes habían tomado una opción más definida a celebrar acuerdos con el PDS (Partido por la Democracia Social) que, finalmente, en el devenir de los acontecimientos, llegara en la Convergencia Descentralista a un acuerdo con el grupo de Simon. La emergencia reciente del movimiento liderado por Ollanta Humala construye un nuevo referente.

En los inicios del año 2004 parecía que los entendimientos más consistentes eran con el PDS, que consideraba que ya estaba cerca de obtener las firmas necesarias para su habilitación legal, proceso que en aquel entonces se frustrara. El PDD confería en apariencia más peso a sus propios cuadros locales que a los representantes de los movimientos regionales. En todo caso, el PDS inicia ante su fracaso primero una segunda etapa aparentemente inconsulta de recolección de firmas en la que algunos movimientos regionales se sienten marginados y consideran que no se estaba discutiendo una política de alianzas sino la subordinación de algunos grupos locales regionales a las direcciones centrales del partido. En todo caso no todos los integrantes de estos grupos tuvieron la misma opinión. Se integraron, en efecto, a la mencionada organización política: el Movimiento de Integración Regional Ancash Unido, la Convergencia Regional Descentralista en Junín y Huancavelica, el Movimiento Autogobierno Ayllu en Cusco —que entiende que tienen una propuesta de desarrollo rural valiosa dirigida a exportar en base a actividades microempresariales de bajo costo, y cuyo dirigente, Carlos Paredes, integra la plancha presidencial—, el Acuerdo por el Cusco, la Alianza Regional Independiente (ARI), el Movimiento Mi Cusco.

El PDS considera que también mantiene fluidas relaciones con grupos en Huánuco, CODEPASCO en Cerro de Pasco —donde tiene influencia decisiva su actual presidente regional Víctor Espinoza—, dos grupos en Loreto, el Movimiento Sanjuanino, la Propuesta Amazonía y, Perú Libre y Solidario de Puno. Además, han conseguido algunos niveles de influencia con dirigentes de movimientos locales en el caso de Lima, Ayacucho, Ica y Ucayali.

El Partido Socialista mantiene una alianza con Poder Democrático Regional (PDR) en Puno, agrupación que ha tratado de preservar niveles de independencia y que procede de dos vertientes, lo que era el Partido Unificado Mariateguista y el Movimiento FIJO. El PS confía, por lo general, en el conjunto del país, en personas surgidas de experiencias políticas partidarias y gremiales, no necesariamente vinculadas a movimientos regionales, entre ellos destaca el caso de representantes de la Confederación Campesina del Perú (CCP). Han mostrado mayor preocupación por trabajar con líderes provinciales que aquellos que se proyectaban al conjunto de un departamento.

En estos alineamientos queda como una iniciativa que pudo ser auspiciosa, pero que resultó finalmente en un proceso truncado, las conversaciones celebradas entre julio y agosto de 2005 entre la Red Nacional de Partidos Regionales y un conjunto de agrupaciones de izquierda. En dichas conversaciones, inicialmente, participaron el Partido Socialista, Avanza País, Unión por el Perú, el Movimiento Humanista y colectivos como Río Abierto. El PDS no asiste ya a estas reuniones.

En el momento de las definiciones de las listas, se perciben las dificultades de establecer alianzas entre partidos y movimientos regionales, quizás más como consecuencia de la debilidad de cada uno de los actores –lo que propicia mutuos recelos- que por una acentuada desigualdad de fuerzas en cada departamento entre organizaciones políticas nacionales y expresiones locales. En San Martín, Nueva Amazonía ha decidido en definitiva participar solamente en las elecciones regionales y municipales, apelando, por lo menos en esta etapa, a sus propias fuerzas. Juan Carlos del Águila, por su parte, se ha integrado a la lista de candidatos de Unidad Nacional en San Martín y

Sandro Rivero, presidente de la Cámara de Comercio, es uno de los candidatos en la lista del Frente de Centro.

En Cajamarca, Jesús Coronel con Fuerza Social, también va a concentrar sus esfuerzos en los comicios regionales y dice aspirar a un proyecto de largo plazo, las elecciones del 2011, para plasmar una alternativa política consistente que articule con efectiva capacidad de incidencia movimientos que tengan vigencia en el conjunto del país y sean capaces de llegar a acuerdos duraderos y bien fundamentados. En cuanto a Fuerza Regional, este grupo no ha logrado siquiera su habilitación legal y sus militantes se han dividido sobre temas relativos a la inversión privada, especialmente la minera, y la apreciación acerca de la imprecisa prédica nacionalista de Ollanta Humala. Algunos de sus dirigentes se acercaron a este partido y existen interpretaciones encontradas, se señala tanto que no fueron tomados en cuenta por la cúpula de esta organización como que los integrantes de este movimiento no les interesaba ser candidatos, opinión que parece contrastar con la tenaz voluntad política que creímos percibir en las entrevistas realizadas.

En Loreto, Iván Vásquez ha hecho una alianza con Alberto Borea yendo como vicepresidente en la plancha de Fuerza Democrática. No está ocupando ningún cargo para el congreso y aparentemente estaría abierta la posibilidad de su candidatura a la presidencia regional, que hasta fines del 2005, era voceada como la de mayor respaldo. Su vulnerabilidad se encuentra en los procesos judiciales que tiene abiertos relativos a su anterior gestión como alcalde. El otro movimiento que ha establecido un alianza con un partido nacional es el BPA, que ha logrado llegar a un acuerdo con el partido de Ollanta Humala colocando como primer candidato al congreso al vicepresidente regional Víctor Isla. Como ocurrió en Cajamarca con Fuerza Regional, también se produjo un vínculo entre el movimiento nacionalista y UNIPOL que no llegó finalmente a concretarse en candidaturas para el congreso. En este caso, UNIPOL mostró posiciones cambiantes entre las opciones de posibles alianzas de izquierda y centro izquierda, terminando en un mayor acercamiento con UPP-MNP.

UNIPOL, es un movimiento que a pesar de haber dirigido el Gobierno Regional, no ha logrado consolidarse como una organización con una proyección a futuro y parte de su debilidad se debe a haberse apoyado en gran medida sólo en la figura de Rivadeneyra. La división entre un sector que apoya la reelección del presidente regional y el encabezado por Elisbán Ochoa, que ha optado por separarse del movimiento y conformar Mi Loreto, ha resquebrajado más aún el movimiento. Si bien Rivadeneyra es una persona que tiene dotes de líder, también se encuentra cuestionado debido a su gestión en el gobierno regional. El peso de estas críticas y las nuevas alianzas que haga para las elecciones regionales, serán determinantes para lograr la reelección a la que aspira, y el resultado de las elecciones presidenciales y congresales, marcarán el camino por donde le será conveniente alinearse, frente a la debilidad de su propio movimiento.

Es como se ha visto un proceso difícil de ordenar, en parte por nuestras limitaciones, en parte por las oscilantes posiciones tanto de los movimientos regionales como de los partidos. En todo caso pueden sacarse algunas conclusiones que no terminan de armonizarse entre sí. Los intentos de reconstruir una opción por el cambio desde los departamentos se encuentran severamente restringidos por las dificultades para definir alianzas con grupos que aspiran a formar partidos nacionales y daría la impresión de que ello no se debe a las disposiciones legislativas que ordenan el tema sino a la desconfianza o el mal manejo de oportunidades de partes que grupos que en principio pudieron estar de acuerdo y que ahora, en muchos casos, se encuentran en pugna. Contradictoriamente, es probable que, en las elecciones regionales, los movimientos consigan en algunos casos logros más o menos apreciables distanciándose de las organizaciones políticas a las que

en principio pretendieron estar vinculados. Es cierto que conviene distinguir lo regional de lo nacional y dar a cada espacio su respectivo ámbito de influencia. Lo que va más lejos de lo deseable es un radical desentendimiento entre unos y otros, y las severas dificultades de diálogo que terminan favoreciendo a personajes que llegan por fuera del sistema de alianzas y que establecen discrecionalmente sus condiciones, como parece ser el caso del partido nacionalista conducido por Ollanta Humala.

Al margen de la suerte de esta última candidatura que ha surgido por fuera del sistema, lo que aquí se ha relatado no es sino un episodio significativo que se agrega a otros, que no es del caso mencionar aquí, que demuestran las severas dificultades que existen en el país para reconstruir una izquierda democrática con un pensamiento renovado, lo que afecta —cada intérprete puede poner el acento donde le parezca— tanto la gobernabilidad política como la perspectivas de pensar en cambios con un decidido contenido de inclusión social.

RELACIÓN DE ENTREVISTADOS

Flavio Vera	Proyecto PRA – San Martín
Cesar Rengifo	Nueva Amazonía – San Martín
Cesar Villanueva	Nueva Amazonía – San Martín
Rolando Reátegui Flores	Movimiento Independiente IDEAS / Sí Cumple – San Martín
Juan Carlos del Águila	Frente Regional – San Martín
Mario Humberto Maineto	Unidad Nacional – San Martín
Marcelo Arévalo	Acción Popular – San Martín
Ignacio Ruiz Dávila	Partido Aprista Peruano – San Martín
Ignacio Yalta Grandez	Partido Popular Cristiano – San Martín
Elba Mestanza Ramírez	Partido Popular Cristiano – San Martín
Pastor Paredes	Servicios Educativos Rurales (SER) – Cajamarca
Iván Salas	Fuerza Regional – Cajamarca
Jesús Coronel	Fuerza Social – Cajamarca
Marco Arana	Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) – Cajamarca
Mariano Mendoza	Frente Regional de Defensa del Medio Ambiente de Cajamarca
Reinhard Siefert	Frente Provincial de Defensa del Medio Ambiente de Cajamarca
Guillermo Rodríguez	Unidad Nacional – Cajamarca
Jorge Arroyo	Partido Aprista Peruano – Cajamarca
Pelayo Roncal	Acción Popular Cajamarca
Robinson Rivadeneyra	Unidos Por Loreto (UNIPOL) – Loreto
Iván Vásquez	Fuerza Loretana
Salomón Avenzur	Movimiento Vamos Loreto
Pablo Soria	Partido Democrático Descentralista – Loreto
Martín Reátegui	Bloque Popular Amazónico
Augusto Vargas	Partido Aprista Peruano – Loreto
Fernando Meléndez Zumaeta	Acción Popular – Loreto
Eloy Pizango	Frente Patriótico de Loreto
José Barletti	Partido Democrático Descentralista
Gustavo Guerra García	Partido por la Democracia Social
Jorge Quezada	Partido Democrático Descentralista
Javier Azpur	Grupo Propuesta Ciudadana

Se terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Tarea Asociación Gráfica Educativa
Pasaje María Auxiliadora 156, Breña
Correo e.: tareagrafica@terra.com.pe
Teléf. 424-8104 / 332-3229 Fax 424-1582
Marzo 2006 - Lima, Perú

Romeo Grompone

Sociólogo y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República (Uruguay). Se desempeña como investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Es profesor de la Maestría de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Escuela de Post Grado de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su Principal área de interés es la política y el sistema político. También ha escrito diversos textos sobre las relaciones entre cultura y sociedad.

Elisa Wiener Bravo

Antropóloga por la Universidad Católica del Perú. Se desempeña como asistente de investigación en el Instituto de Estudios Peruanos. Ha realizado estudios sobre gestión y participación ciudadana, y recientemente sobre sociología política.

GRUPO Propuesta CIUDADANA

León de la Fuente 110 Magdalena
Teléfono: 613-8313 telefax: 613-8315
e-mail:propuest@desco.org.pe

Auspician:

Cooperación Belga al Desarrollo .be

eed Evangelischer Entwicklungsdienst

USAID | PERU DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA